

**Movimiento Estudiantil Colombiano y Acción Colectiva: El Rol del
Movimiento Estudiantil en 2021 y su Incidencia en la Transformación del
ESMAD**

Tesis de Pregrado en Ciencia Política

Cristian Camilo Silva Castillo

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Universidad El Bosque

Bogotá D.C.

Abril de 2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

CAPÍTULO 1. ENTENDIMIENTO DE LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA DESDE LA DÉCADA DE 1990

1.1. ESMAD: Actor clave en el entendimiento de la protesta social en Colombia desde la década de 1990.....	1
1.2. Contexto General de las Protestas Sociales en Colombia	9
1.3. La narrativa del estallido social.....	16

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO: EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN COLOMBIA VISTO DESDE LA ACCIÓN COLECTIVA

2.1. La Movilización Como Expresión de la Acción Colectiva.....	24
2.2. Sídney Tarrow: Oportunidades Políticas y Marcos de Acción Colectiva...	26
2.3. Melucci y La Acción Colectiva como Reflejo de Propósitos Plurales...	29
2.4. Repertorios de Movilización y Estrategias de Comunicación en la Acción Colectiva Charle Tilly.....	33
2.5. Mancur Olson y la Lógica de la Acción Colectiva: First Movers y Homogeneidad del Grupo.....	36

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES FINALES

3.1. Incidencia Política.....	40
3.2. Cuatro razones para entender la incidencia del movimiento estudiantil en el estallido social de 2021 y la reforma del ESMAD.....	42

3.2.1. Primera Razón: Aprovechamiento de la EOP y el Nuevo Marco de Acción Colectiva.....	42
3.2.2. Segunda Razón: La dignidad como propósito colectivo y reflejo de la ampliación de significado.....	44
3.2.3. Tercera razón: Organización y sostenibilidad de los repertorios de protesta y comunicación del movimiento estudiantil.....	45
3.2.4. Cuarta razón: First Movers y la homogeneidad del movimiento estudiantil	46
3.3. Conclusiones.....	49

Movimiento Estudiantil y Acción Colectiva: El Rol del Movimiento Estudiantil para la Transformación del ESMAD

RESUMEN

Esta investigación analiza el papel del movimiento estudiantil en el estallido social de 2021 en Colombia desde la teoría de la acción colectiva. El documento explora cómo incidió dicho movimiento, articulando demandas que influyeron en la transformación y reforma del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). A partir de las contribuciones teóricas de Sidney Tarrow, Alberto Melucci, Mancur Olson y Charle Tilly, el estudio contempla este caso desde categorías analíticas como las oportunidades políticas, los marcos de acción colectiva, las solidaridades compartidas y la construcción de significados. Finalmente, la investigación examina las estrategias, repertorios y formas organizativas del movimiento estudiantil.

Los hallazgos sugieren que el movimiento estudiantil desempeñó un papel central en la redefinición de la legitimidad de la protesta y en la generación de presión pública que condujo a la reestructuración del ESMAD en la actual Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

ABSTRACT

This research analyzes the role of the student movement in Colombia's 2021 social uprising from the perspective of collective action theory. The document explores how students emerged as key agents of social change articulating demands that challenged and influenced the ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) transformation. Drawing on theoretical contributions from Sidney Tarrow, Alberto Melucci, and Mancur Olson, the study contemplates this case from the point of view of analytical categories such as political opportunities, collective action frames, shared solidarities, and meaning making. Finally, the research examines the student movement's strategies, repertoires, and organizational forms.

The findings suggest that the student movement played a central role in redefining the legitimacy of protest and shaping public pressure that led to the restructuring of ESMAD into the Dialogue and Order Maintenance Unit (UNDMO).

INTRODUCCIÓN.

Este trabajo de investigación pretende comprender el papel del movimiento estudiantil desde el enfoque de acción colectiva y su impacto en el desarrollo de algunos de los acuerdos establecidos en el marco del denominado estallido social de 2021. En particular, se propone analizar cómo la protesta social liderada por los estudiantes permitió canalizar y visibilizar diversas demandas, especialmente en el ámbito educativo, y con dicha participación incidió en los debates y decisiones públicas en torno a la transformación institucional del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), unidad perteneciente a la Policía Nacional.

Así, en el marco de estos procesos de agitación social, disputas simbólicas y reclamos ciudadanos, surge la pregunta *¿De qué manera la actuación del movimiento estudiantil en el estallido social del 2021 incidió en el proceso político y social que condujo a la reforma del ESMAD?*

Esta pregunta orienta el análisis hacia la interacción entre protesta social, juventud organizada y transformación de las instituciones de seguridad y control, aportando a una comprensión más profunda de las dinámicas actuales del conflicto social y político en Colombia.

Para abordar este interrogante, la investigación se estructura en tres secciones. En primer lugar, se realizará un análisis empírico basado en la recolección de datos sobre la actuación del ESMAD durante las protestas, haciendo especial énfasis en casos documentados de uso excesivo de la fuerza, que van desde agresiones físicas y lesiones personales hasta episodios de hostigamiento por parte de miembros de la Policía.

Esta revisión incluirá informes de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y entidades estatales, con el fin de identificar patrones de conducta institucional y sus consecuencias sobre el ejercicio del derecho a la protesta. De igual manera, se desarrollará un análisis histórico desde la creación del ESMAD y su influencia en la protesta social desde la década de los noventa hasta la actualidad, examinando su evolución como actor en la protesta social

En segundo lugar, el análisis se centrará en una revisión conceptual del enfoque de la acción colectiva, el cual ofrece herramientas para comprender como surge, se organiza y actúan los movimientos sociales. A través de los aportes de autores como Sidney Tarrow, Mancur Olson,

Alberto Melucci y Charle Tilly, se buscará establecer un marco teórico sólido que permita explicar no solo el comportamiento del movimiento estudiantil, sino su capacidad para generar presión política en contexto de conflicto social. Sidney Tarrow aporta una visión estructural del enfoque de la acción colectiva, destacando la importancia de las oportunidades políticas como de los repertorios de acción en la protesta social. Por su parte, Mancur Olson introduce una perspectiva centrada a los costos de participación, lo que permite examinar el papel de los “first movers” y la gestión de los recursos organizativos dentro del movimiento. Finalmente, Alberto Melucci aporta una mirada simbólica y cultural, enfocándose en la construcción de la identidad colectiva y la creación de significado como elementos claves de la acción colectiva.

Con base en estos marcos teóricos, se establece una serie de categorías analíticas que serán aplicadas al caso del movimiento estudiantil colombiano durante el estallido social. Estas categorías incluyen: oportunidades políticas, marcos de acción colectiva, estrategias comunicativas, recursos de organización, solidaridad compartida y significados identitarios. Su aplicación permitirá descomponer el fenómeno de la protesta estudiantil en dimensiones teóricas concretas, facilitando un análisis de su papel en la transformación institucional del ESMAD.

El tercer eje de esta investigación se orienta al análisis de la incidencia del movimiento estudiantil en el proceso de transformación institucional del ESMAD, en el marco del estallido social de 2021. Para ello, se abordará el impacto de las acciones de protesta en el debate público, así como las respuestas adoptadas por el Estado colombiano frente a la presión social ejercida por los estudiantes y otros sectores movilizados.

Se estudiará cómo el movimiento estudiantil logró posicionar demandas en la agenda mediática y política, especialmente aquellas relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD, la criminalización de la protesta y la necesidad de una reforma en los protocolos de intervención. A través del uso estratégico de medios digitales, vocerías estudiantiles y alianzas con organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil logró ejercer una presión considerable que reconfiguro la percepción pública sobre el papel, de las fuerzas antidisturbios.

JUSTIFICACIÓN.

La presente investigación se centra en el rol del movimiento estudiantil en la protesta social de Colombia, con especial énfasis en las expresiones de rechazo hacia el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la exigencia por su reestructuración. Este enfoque resulta relevante por su impacto en múltiples niveles: Social, académico, y teórico, particularmente en el campo de la ciencia política.

Desde una perspectiva social, la protesta estudiantil representa una forma legítima de participación ciudadana que busca visibilizar y transformar realidades percibidas como injustas (Archila Neira, 2003). En Colombia, los estudiantes han sido actores recurrentes en escenarios de protesta frente a reformas educativas, abusos de autoridad y decisiones estatales que afectan derechos fundamentales. En el caso específico el ESMAD, las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza y vulneración de derechos a la protesta generaron una respuesta colectiva, evidenciada en manifestaciones públicas, plantones y cacerolazos. Analizar estas protestas permite comprender las tensiones entre el ejercicio de la ciudadanía activa y la respuesta institucional del Estado colombiano.

En el ámbito académico y teórico, el estudio se fundamenta en las contribuciones de Sidney Tarrow, Mancur Olson y Alberto Melucci, cuyas perspectivas permiten descomponer el fenómeno de la protesta en elementos estratégicos, simbólicos y estructurales. La aplicación de categorías analíticas como de oportunidades políticas, solidaridad compartida, creación de significados, marcos de acción colectiva y recursos organizativos posibilitan una mirada integral del fenómeno.

Estas categorías enriquecen el análisis al permitir una comprensión de la protesta social en Colombia, y vincularlo con las dinámicas estructurales del contexto político nacional. En el desarrollo del trabajo de grado, esta perspectiva será importante para identificar cómo los movimientos sociales, y en particular, el movimiento estudiantil actúa como actor social que expresa demandas colectivas y contribuyen a la construcción de una ciudadanía crítica y participativa.

En términos de la ciencia política, el análisis de la protesta social estudiantil como una forma de acción colectiva permite interrogar los límites de la democracia, el papel del Estado en el

control del orden público y la legitimidad del uso de la fuerza. Este tipo de investigaciones ofrece elementos valiosos para entender la relación entre gobernabilidad, participación ciudadana y derechos humanos. Además, contribuye a los debates actuales, y la forma en que los movimientos sociales influyen en la formulación de políticas públicas.

Esta investigación aporta a la comprensión del conflicto social contemporáneo desde una perspectiva crítica, que reconoce la protesta social como una reacción ante el poder y una herramienta de producción de sentido político y transformación. (Archila Neira, 2003). En particular, el estudio del movimiento estudiantil evidencia cómo se cuestionan las estructuras de dominación y propone alternativas desde la acción colectiva. Así, el trabajo contribuye a visibilizar las dinámicas que configuran los escenarios de protesta en Colombia. Para centrarse en la construcción de narrativas y prácticas de resistencia en contextos de malestar social.

OBJETIVOS.

3.1. Objetivo general

3.1.1 Analizar la incidencia del movimiento estudiantil durante el estallido social de 2021 en Colombia desde la teoría de la acción colectiva, considerando su rol como actor de cambio social, sus recursos, y su capacidad para articular demandas colectivas que contribuyeron a cuestionar y proponer transformaciones en la estructura y el accionar del ESMAD.

3.2. Objetivos específicos

3.2.1. Identificar algunas de las características y rasgos más relevantes de la protesta social en Colombia desde la década de los noventa en adelante, haciendo énfasis en el movimiento estudiantil, y como este logra visibilizar sus demandas y generar presión social a través de repertorios de protesta, recursos para la organización territorial, y estrategias de comunicación.

3.2.2. Explorar teóricamente algunos de los referentes más importantes dentro del enfoque de la acción colectiva, con el fin de establecer categorías de análisis que permitan valorar y

comprender el rol del movimiento estudiantil en el marco del estallido social de 2021, y en particular, en el proceso de reforma del ESMAD.

3.2.3. Analizar la incidencia del movimiento estudiantil en el debate público y las respuestas institucionales que llevaron a la transformación del ESMAD en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)

3.2.4. Analizar el papel del movimiento estudiantil en la configuración de demandas sociales durante el estallido social de 2021, en relación con el uso de la fuerza pública y el accionar del ESMAD.

CAPÍTULO 1.

ENTENDIMIENTO DE LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA DESDE LA DÉCADA DE 1990

1.1. ESMAD: Actor clave en el entendimiento de la protesta social en Colombia desde la década de 1990.

La historia de Colombia, en la década de los ochenta y noventa, estuvo marcada por el conflicto interno, la lucha de interés en el sector político y la transición hacia un modelo neoliberal (Palacios, 2012). Se puede decir, que la violencia asociada al conflicto interno presentó una evolución, tanto en su intensidad como en sus actores involucrados, lo cual supuso nuevos desafíos de seguridad para el Estado y su brazo armado (Grupo de Memoria Histórica, 2013).

Tras una etapa de disminución del conflicto en Colombia entre 1958 y 1964, el país pasó de una violencia bipartidista a una de corte subversivo. Entre 1965 y 1981 se mantuvo un periodo estable, con niveles bajos de violencia, pero a partir de 1982 se inició una fase de intensificación progresiva de la violencia, que se extendió hasta 2002 (Grupo de Memoria Histórica, 2013). Este periodo, estuvo marcado por el fortalecimiento militar de las guerrillas y su expansión por el territorio nacional, el surgimiento de grupos paramilitares, la proliferación del narcotráfico y una creciente debilidad institucional. (Grupo de Memoria Histórica, 2013)

Las dinámicas de la evolución de la violencia en Colombia, en el marco del conflicto armado, pueden observarse con mayor claridad a través de las cifras de víctimas mortales registradas entre 1958 y 2012, como se muestra en el siguiente cuadro (Grupo de Memoria Histórica, 2013):

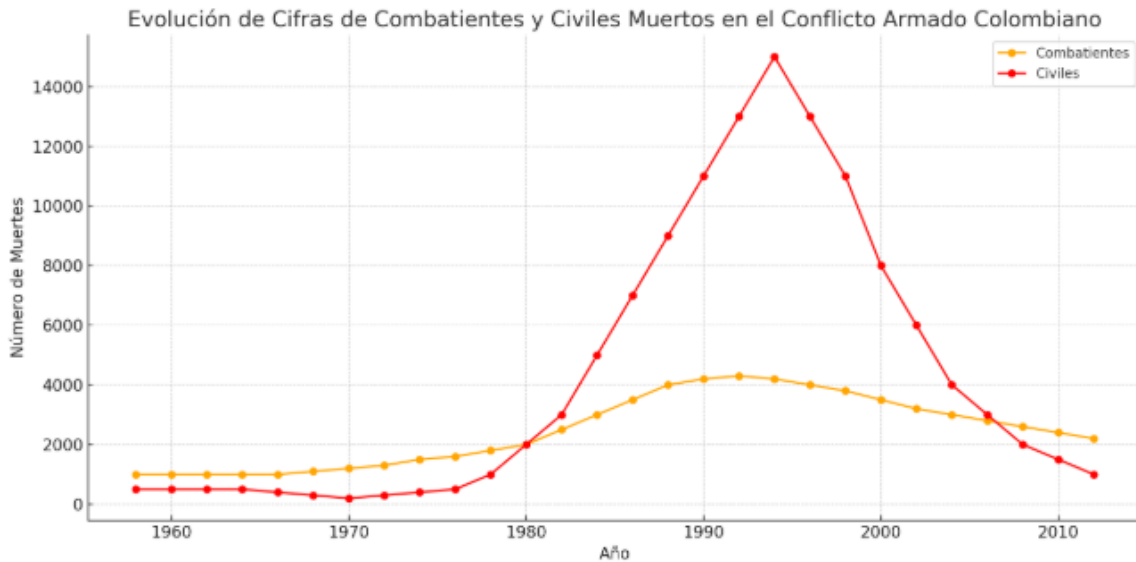


Figura 1, Fuente: Grupo de Memoria Histórica, 2013. Elaboración propia.

Se puede decir que la creación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) fue una respuesta institucional que pretendía ser una herramienta más en la lucha contra lo que Casas Ramírez (2019, P, 79) denominó “enemigo interno”, fue una respuesta institucional para respaldar la fuerza y legitimidad del Estado Social de Derecho en contextos específicos donde se evidenciaban amenazas para la estabilidad y el orden interno.

El ESMAD respondió a la necesidad de una idea de seguridad nacional, donde el mantenimiento del orden interno se volvió prioritario ante la percepción de múltiples amenazas. La institucionalización de esta unidad policial llegó a entenderse como un enfoque estatal que entendía la protesta y movilización social con expresiones de desestabilización, equiparándolas dentro de la categoría de “enemigo interno” (Casas Ramírez, 2019). Esta mirada justificó el fortalecimiento de los dispositivos de control como el ESMAD, legitimando su uso bajo la idea de garantizar la paz y la convivencia en los espacios públicos.

El ESMAD, como afirmó Casas Ramírez, es una fuerza de choque que se liga a una idea de seguridad nacional que combate a la subversión¹ y otras manifestaciones en contra del orden público interno. Se creó en el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) el 24 de febrero de 1999, con base en la resolución n.º 01363 de 1999, la cual estableció:

¹ El término subversión, hace referencia en la obra de Casas Ramírez (2019), a cualquier forma de oposición, protesta, o resistencia que desafía el orden establecido y que, desde la perspectiva de la seguridad nacional, puede percibirse como una amenaza al Estado o a sus instituciones.

“El ESMAD es una fuerza debidamente entrenada en el uso de armamento no letal y en el manejo adecuado de marchas, paros y en general todo lo relacionado con la atención de multitudes” (Casas Ramírez, 2019, P, 77).

El rol del ESMAD se caracterizó por hacer intervenciones que preservaron el orden y en varias ocasiones restableció la seguridad en los espacios públicos. Si se consideran algunos lineamientos generales de su funcionamiento, se puede decir que esta instancia se guio por ocho funciones que dieron el marco de actuación a la policía antimotines, y se caracterizó por intervenir los diferentes tipos de asociaciones de masas que tenían algún tipo de representación social en Colombia, y se expresaban en el espacio público a través de diversos repertorios de protesta que podían, en algunas ocasiones, amenazar el orden y la seguridad pública. (Casas Ramírez, 2019)

Este tipo de intervenciones no eran aisladas ni meramente reactivas, sino que se inscriben en una lógica de control y regulación del uso de los espacios públicos. A medida que la protesta social se hizo más frecuente y visible en la agenda pública colombiana, el Estado adoptó mecanismos institucionales y normativos que reforzaron el accionar del ESMAD como una herramienta para gestionar la protesta (Casas Ramírez, 2019). De esta manera, el tratamiento de las colectividades sociales pasó de una lectura política a una lógica de seguridad², en la que las expresiones colectivas eran interpretadas como focos de alteración del orden. Esta transformación en la comprensión del conflicto social abrió el camino para que, en gobiernos posteriores, se implementarán medidas que ampliaron las facultades operativas y represivas del escuadrón antidisturbios

La evolución del cuerpo policial del ESMAD ocurrió gracias a la resolución n.º 02686 en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Esta resolución estableció el uso de armas de tipología “letal reducido”³ y dio inicio al uso del gas pimienta, las bombas lacrimógenas y las

² La lógica de seguridad del gobierno de Andrés Pastrana puede entenderse como un enfoque que combino la búsqueda de la paz mediante el diálogo con las insurgencias y el fortalecimiento del Estado para garantizar el control en el territorio nacional. (Juan Pablo Guevara, 2015)

³ Según Olarte y Huertas (2014) son aquellas diseñadas para neutralizar a un adversario sin causarle la muerte y minimizando su impacto sobre el medio ambiente. El doctor Jhon Alexander, del Laboratorio Nacional de los Álamos (EE. UU.) las define como “Aquellas tecnologías que permiten la proyección de fuerzas que minimizan la posibilidad de consecuencias mortales.” La definición es amplia porque incluye una enorme

descargas eléctricas. (Casas Ramírez, 2019). Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Política de Seguridad Democrática se enfocó en fortalecer el Estado con un enfoque en seguridad y defensa nacional para combatir a los grupos armados ilegales. Así mismo, ese gobierno también implementó medidas que afectaron las movilizaciones sociales, toda vez que, en este mandato presidencial, hubo un respaldo económico, político e ideológico a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Policía en el país.

Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el uso de la fuerza pública, durante las movilizaciones que tuvieron lugar en Colombia, se incrementó significativamente gracias a la Política de Seguridad Democrática, ya que existieron intervenciones mediadas por la fuerza por parte del ESMAD, así como la militarización de zonas de alta conflictividad social. Esto generó un clima de mayor tensión entre las comunidades y las fuerzas del orden público, afectando la percepción ciudadana sobre el uso legítimo de la fuerza en el marco de la protesta social.

Según el CINEP, entre los años 2002 y 2012, se documentaron numerosas violaciones de derechos humanos atribuidas a agentes estatales, especialmente en el control de las protestas, en donde entre el 2002 y 2004 alcanzó un pico de 340 casos. Este año en particular se registró 120 personas heridas, 70 detenciones arbitrarias, 60 ejecuciones extrajudiciales y 90 casos de tortura en el marco de la protesta social. Así mismo, en los años posteriores, se mantuvo una cifra de 220 casos anuales por abuso y exceso de fuerza. (Centro de Investigación y Educación Popular, 2013)

A lo largo de su existencia, el ESMAD fue señalado, en varias ocasiones, por afectar física y psicológicamente a varios grupos de la población, entre los que se encuentran: Organizaciones indígenas, asociaciones campesinas, grupos afrodescendientes, sindicatos y organizaciones estudiantiles. Las denuncias más frecuentes contra el ESMAD fueron relacionadas con lesiones causadas por armas blancas y objetos contundentes, así como abusos y amenazas sexuales tanto a hombres como a mujeres (Casas Ramírez, 2019).

variedad de áreas, donde se pueden aplicar conocimientos de química y psicología que permiten, como resultado, que las autoridades enfrenten a una persona en forma preventiva y sin causarle ninguna lesión. Las características esenciales de las armas no letales son su intencionalidad y los efectos por conseguir. Intencionalidad: Son armas no concebidas para matar ni destruir. No deben causar hematomas, ni causar lesiones o heridas, así sean mínimas. Efectos: Las armas no letales incapacitan temporalmente a las personas, minimizando los daños colaterales y medioambientales, sin dejar ningún tipo de secuelas.

Dada la evolución de este cuerpo de policía y su presencia fortalecida en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) empezaron a ser puestos en consideración en el debate público nacional, el uso de elementos de represión como las balas de goma y los gases lacrimógenos, la aplicación desproporcionada de la fuerza, autoridad y armas de tipología no letal, como, por ejemplo, Taser y Pistolas de electrochoque, y bombas aturdidoras.

Diversas organizaciones documentaron las consecuencias de estas prácticas entre 1999 y 2019, el CINEP reportó al menos 43 muertes en intervenciones del ESMAD desde su creación, de las cuales 26 ocurrieron en movilizaciones sociales, 4 en concentraciones campesinas, 5 en la lucha por la liberación y restitución de la tierra rural, 2 en temas de desalojo, y 4 en intervenciones a la salida de los estadios de fútbol (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2019). Así mismo, la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) contabilizó 34 muertes atribuibles al uso indebido de armas no letales. Además, la RIDH advirtió sobre un preocupante vacío legal en la legislación colombiana respecto al uso de este tipo de armamento porque no existe una normativa clara sobre el tipo de armas que pueden emplearse, las condiciones bajo las cuales se autoriza ni los protocolos que garanticen su uso proporcional y responsable (Patiño, 2019)

Inicialmente, el objetivo de este cuerpo institucional de la Policía Nacional era: "Contribuir con pautas para contrarrestar los desórdenes públicos generados por diferentes grupos sociales mediante la aplicación de procedimientos establecidos y transparentes, administrando el material y equipos de guerra de la Policía Nacional, restableciendo la convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción afectada" (Policía Nacional de Colombia.), no obstante, esta misionalidad, orientada a la preservación de la seguridad, el orden y la convivencia en el espacio público, fue una de las más polémicas en la opinión pública, debido a múltiples denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza,

Específicamente, durante el estallido social en Colombia en 2021, se reportaron, según un informe de Temblores ONG e Indepaz (2021) 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1055 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 442 intervenciones violentas en el marco de la protesta pacífica, 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos con arma de fuego en contra de la

población que se estaba manifestando, 16 víctimas de violencia sexual y 3 víctimas de violencia de género. (Temblores ONG & Indepaz, 2021)

En este sentido, y en el marco del denominado estallido social de 2021, el movimiento estudiantil estuvo presente en el debate público que demandaba una reforma estructural de este escuadrón, promoviendo debates sobre su legitimidad, protocolos y procedimientos, y sobre todo la aplicabilidad de este dado su marco normativo y regulatorio. A través de acciones colectivas como asambleas, manifestaciones pacíficas y el uso estratégico de las redes sociales, el movimiento logró posicionar en la agenda pública la necesidad de revisar el marco normativo y regulatorio del uso de la fuerza en Colombia.

A partir de las movilizaciones sociales de septiembre y noviembre de 2019 en contra del Gobierno de Iván Duque y el Paro Nacional de 2021 (También denominado estallido social), la presión ejercida por organizaciones sociales estudiantiles y defensoras de derechos humanos impulsó la exigencia de una nueva reforma estructural del Escuadrón Móvil Antidisturbios. En respuesta de estas demandas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro (2022-2026) propuso su transformación, la cual se formalizó mediante la Resolución 03684 del 11 de noviembre de 2022, que establece la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Para la presente investigación sobre el rol del movimiento estudiantil, y su incidencia en la transformación del ESMAD, es relevante tener en cuenta las funciones en el campo de acción de este escuadrón. Por esta razón, en esta sección de la investigación se abordará de manera pertinente cada una de las funciones de este grupo policial especializado (Álvarez Zapata, 2023).

Las funciones del ESMAD, según la Policía Nacional de Colombia, fueron:

- Coordinar con las unidades policiales las capacidades que se requieran en la atención de situaciones de alteración del orden público con el propósito de aportar al restablecimiento del ejercicio de los derechos y libertades públicas.
- Orientar el despliegue de la actividad de policía para el control de disturbios, motines, asonadas o cualquier otra actividad delictiva, violenta o contraria a la convivencia que se derive de la aglomeración de personas, con el propósito de mantener o restablecer las condiciones de orden público, seguridad y convivencia.

- Asesorar a la jefatura nacional de servicios de policía y a las unidades policiales de la atención, manejo y control de multitudes, disturbios y restablecimientos del orden público, para la seguridad y convivencia en el territorio nacional.
- Orientar la aplicación de las normas en materia de Derechos Humanos, en el marco de la misionalidad de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
- Evaluar las actividades desarrolladas por la Unidad, en coordinación con las unidades de policía, con el objetivo de proponer los recursos de acción para la mejora continua, frente a las actividades propias de la misionalidad.
- Presentar a la Jefatura Nacional de Servicio de Policía las necesidades del personal, selección y adquisición de material logístico y medios tecnológicos requeridos para el cumplimiento de la misionalidad de la Unidad.
- Realizar las coordinaciones institucionales e interinstitucionales con el propósito de fortalecer las competencias del personal de la Unidad en materia de diálogo, mediación, uso de la fuerza y Derechos Humanos, entre otros. (Policía Nacional de Colombia)

Si bien las funciones asignadas al ESMAD establecieron un marco operativo orientado al mantenimiento del orden público, su aplicación en el terreno fue motivo de constantes cuestionamientos. En teoría, estas actuaciones debían regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Sin embargo, diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documentaron múltiples casos de uso excesivo de la fuerza en el contexto de la protesta social. Esta situación intensificó las demandas ciudadanas para una transformación profunda de esta unidad policial por parte de amplios sectores de la sociedad civil.

Ante este panorama de creciente inconformidad, las tensiones escalaron con el estallido social de 2021, cuando miles de ciudadanos se movilizaron en todo el país para rechazar diversas políticas del gobierno. La actuación del ESMAD durante estas jornadas fue especialmente cuestionada por su respuesta represiva frente a las manifestaciones mayoritariamente pacíficas. Las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y lesiones

graves a manifestantes atrajeron la atención de los organismos internacionales, que intensificaron su monitoreo sobre la situación de Colombia. Fue en este marco, que se registraron algunas de las vulneraciones más graves de derechos humanos, lo cual motivó la intervención directa de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,2021), documentó con preocupación que las jornadas de manifestación iniciadas el 28 de abril de 2021 estuvieron marcadas por graves violaciones de Derechos Humanos. Entre los principales hallazgos se identificaron vulneraciones al derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de los manifestantes.

Por otro lado, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas presento un balance de las denuncias en el marco del estallido social, identificó un conjunto de situaciones sistemáticas y casos atribuibles a agentes del Estado, en particular en integrantes de la Fuerza Pública, las cuales incluyeron tratos cueles, detenciones arbitrarias y casos de abuso sexual. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2021)

En complemento a estas observaciones, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indico que entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, se recibieron denuncias de 63 muertes en el marco de la protesta social, de las cuales 46 fueron verificadas, adicionalmente se recibieron 60 denuncias por violencia sexual de las cuales 48 son mujeres y 12 hombres, en su mayoría atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2021).

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita en junio de 2021, reporto 1106 civiles lesionados en las jornadas de la protesta social, también 783 personas desaparecidas, de las cuales 318 fueron descartados debido a que habían sido localizados o eran casos repetidos, de igual manera, se reportaron 113 de violencia de género incluyendo 27 casos de violencia sexual, 5 hechos de acceso carnal violento y 22 tocamientos por parte de miembros de la Fuerza Pública, adicional a ello se reportaron 84 víctimas de lesiones oculares y 3274 personas habrían sido retenidas en las jornadas de la protesta social (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021).

En este contexto, el movimiento estudiantil fue un actor clave en la exigencia de reformas y en la denuncia de abusos cometidos por el ESMAD. A lo largo de esta investigación, se examinará de qué manera la acción colectiva del movimiento estudiantil incidió en el debate, y el proceso sobre el futuro de esta Unidad Policial, y los cambios propuestos por el Gobierno para su transformación al hoy conocido como UNDMO.

Así mismo, se analizará cómo las movilizaciones, pronunciamientos públicos y estrategias de resistencia impulsadas desde las universidades lograron posicionar en la agenda pública y mediática las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza, incidieron en el proceso para replantear el papel del ESMAD dentro del marco de la protesta social. Finalmente, se analizará si estos cambios representan una transformación sustancial en la práctica de las acciones que reflejan la misionalidad de esta unidad policial.

1.2. Contexto General de las Protestas Sociales en Colombia.

Colombia ha sido históricamente un país marcado por profundas desigualdades socioeconómicas, conflictos armados internos y crisis políticas que han generado tensiones estructurales a lo largo de su historia (Archila Neira, 2003). Estas condiciones han dado lugar a una sociedad profundamente fragmentada, en la que amplios sectores de la población quedan excluidos de los beneficios del desarrollo y de una participación política efectiva. A finales del siglo XX y principalmente el siglo XXI, la violencia estructural, el acceso desigual a recursos y oportunidades, así como la concentración del poder económico y político, alimentaron ciclos de movilización social, resistencia popular y confrontación con las instituciones.

En este contexto, las demandas ciudadanas por justicia social, equidad y reconocimiento han sido canalizadas a través de diversos movimientos sociales, entre ellos el movimiento estudiantil, los sindicatos, las organizaciones campesinas e indígenas, cuyas acciones son respondidas con represión o mecanismos institucionales de control. Esta historia de exclusión y conflicto dejó huella condicionando las formas de protesta como la respuesta del Estado frente a ella.

Por ejemplo, según el índice de Gini, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2022, este indicador alcanzó un porcentaje de 54,8% (Banco Mundial, 2022) uno de los más altos comparados con los demás países de la región. Asimismo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2024, el 33% de la población se encuentra en situación de pobreza monetaria y un 11% se encuentra en pobreza extrema. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2024).

La desigualdad en general, y la desigualdad económica y social en particular, ha sido un factor determinante en el auge de la movilización social en la última década, la Comisión Interamericana (CIDH,2021) constató que las jornadas de protesta estuvieron motivadas por el aumento de los niveles de pobreza, inequidad y violencia. Esto se vio reflejado en el índice de desempleo a nivel nacional, que para el primer trimestre del 2021 alcanzó un 15,1% afectando particularmente a mujeres con una tasa del 19,9% y jóvenes con una tasa de 18,1% (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021).

Durante el Paro Nacional del 2021, se puede decir que el movimiento estudiantil se erigió como un actor clave en la protesta, exigiendo no solo mejores condiciones para la educación pública, sino también respuestas estructurales a la crisis social y económica que atravesaba Colombia en ese momento. Sin embargo, la respuesta estatal priorizó la represión con la intervención del ESMAD como mecanismo de control, lo que generó un aumento en las denuncias por el uso excesivo de la fuerza.

En el marco institucional de Colombia, y en cumplimiento de la Corte Suprema de Justicia, se expidió el decreto 003 de 2021, Estatuto de Reacción, Uso, y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana. Esta norma regula la actuación de la Policía Nacional frente a manifestaciones públicas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021).

El Artículo 2 de este Decreto, estableció el diálogo como un mecanismo principal para entablar una relación entre las autoridades y los manifestantes. Sin embargo, las denuncias reportadas durante el estallido social del 2021 se centraban en una respuesta violenta y disuasiva por parte del ESMAD, esto se vio reflejado “mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas venom, el empleo

indiscriminado de armas de fuego, y la falta de identificación de muchos funcionarios de la Policía” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021).

Como consecuencia de esta intervención de las fuerzas públicas, el 28 de mayo de 2021, solo en la ciudad de Cali se registraron 13 personas muertas y 36 lesionadas a causa del abuso de la fuerza por parte de miembros de la fuerza pública (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021). Los hechos de violencia estatal no pueden entenderse como eventos aislados, sino como parte de una continuidad histórica en la forma en que el Estado colombiano ha gestionado las expresiones de descontento social, particularmente aquellas protagonizadas por sectores juveniles y estudiantiles.

“Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país justo” (Guevara Rosas, 2021) La intervención represiva del 28 de mayo en Cali evidenció cómo las fuerzas del orden fueron empleadas sistemáticamente para contener y disuadir la movilización social, incluso de vulnerar los derechos fundamentales. En este panorama, el movimiento estudiantil, jugó un papel central como actor político, articulando las demandas de la defensa de la educación pública, y la solidaridad con otros sectores por las reformas estructurales del Estado. Su capacidad de convocatoria, su presencia activa en las calles y su liderazgo en la organización de marchas y asambleas lo posicionaron como una fuerza en la configuración del Paro Nacional del 2021

Haciendo una revisión general de la última década, las cifras evidencian que han ocurrido fuertes movilizaciones en respuesta a cambios y propuestas de distinto orden (político, económico, educativo, agrario, entre otros) que han desfavorecido a diferentes sectores sociales. Uno de los ejemplos más representativos de estas tensiones, fue el Paro Nacional Agrario de 2013 que comenzó el 19 de agosto y finalizó el 12 de septiembre, en el cual pequeños productores, campesinos y grupos indígenas protestaron en contra de los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio (TLC). Este acuerdo encareció los insumos agrícolas, generó competencia desleal con los productos importados y estableció medidas estrictas sobre el uso de semillas nacionales, lo que afectó la producción agrícola en todo el país. (Cruz Rodríguez, 2017).

Estas demandas incluyeron una reforma agraria para solucionar los problemas estructurales del sector, disminuir el costo de los insumos agrícolas, frenar la entrada de productos

importados, suspender los acuerdos de libre comercio, perdonar las deudas de los agricultores, fijar precios mínimos para los productos nacionales y evitar que la propiedad de la tierra pase a manos extranjeras (Cruz Rodríguez, 2017).

Uno de los principales logros alcanzados durante el Paro Nacional Agrario fue la creación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo. Este espacio resultó fundamental para visibilizar las demandas de los campesinos frente al gobierno, para establecer mecanismos de solución para el sector agrario mediante la concertación de políticas públicas. Además, se establece el compromiso con el Gobierno Nacional, en ese entonces, liderado por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, para diseñar programas que aliviaran la deuda de los pequeños productores y campesinos, así como la implementación de programas de intervención rural para facilitar el acceso a los campesinos en el mercado nacional y una inversión en infraestructura rural, con el objetivo de ampliar los servicios básicos a comunidades campesinas marginadas (Cruz Rodríguez, 2017).

La desigualdad socioeconómica en Colombia es entonces una condición institucional que afecta el funcionamiento de múltiples ámbitos sociales en el país (Kalmanovitz, 2021). En este sentido, el sector de la educación en Colombia se ha visto afectado por la falta de oportunidades en términos de acceso, en especial a la educación superior. En 2011, por ejemplo, la tasa de pobreza monetaria era de un 34,1%, lo que indicaba que un tercio de la población no podía cubrir sus necesidades básicas (Departamento Nacional de Planeación, 2012). Esta tasa de desigualdad en Colombia ha limitado las oportunidades educativas para las personas de bajos recursos.

Esta situación estructural de desigualdad se reflejó especialmente en la educación superior, donde las barreras económicas, sociales y territoriales limitan el acceso y la permanencia de miles de jóvenes en el sistema educativo colombiano. Entre 2015 y 2021, Colombia registró tasas de deserción en los niveles técnico, tecnólogo y universitario. Por ejemplo, en 2015 la tasa de deserción fue del 9.3% en programas universitarios, 9.0% en técnicos profesionales y un 18.3% en carreras tecnológicas. (Ministerio de Educación Nacional, 2016) Estos indicadores se agravaron en el contexto de la pandemia y el estallido social de 2021, año en que 243.801 estudiantes abandonaron el sistema educativo y la deserción se disparó al 34.1% en programas tecnológicos, y al 18.79 en técnicos profesionales. (Ministerio de Educación, 2022).

Estas cifras evidenciaron las condiciones socioeconómicas adversas que afectan directamente el derecho a la educación, aumentando una creciente inconformidad en los sectores juveniles frente al modelo educativo colombiano. Esta tendencia en la deserción educativa puede observarse con mayor claridad en la figura 2, donde se ilustran las tasas por nivel educativo entre los años 2018 y 2021.

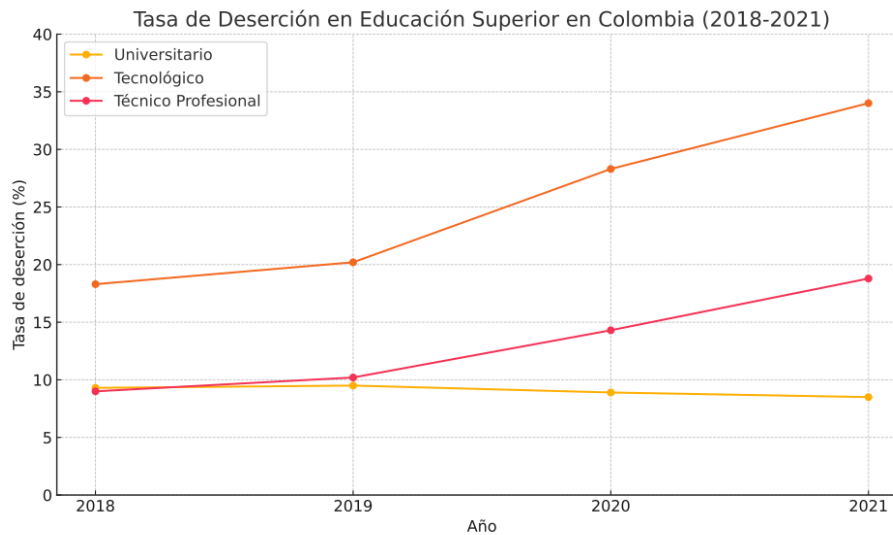


Figura 2, Fuente: Ministerio de Educación 2022. Elaboración propia

La problemática de la educación en Colombia se agrava si se considera el desfinanciamiento hacia las universidades públicas. Entre 2018 y 2021, el déficit acumulado de estas instituciones superó los 15 billones de pesos, reflejando una brecha entre los recursos necesarios para su funcionamiento e infraestructura y los aportes reales del Estado. (Rubio & Chacón, 2023). La insuficiencia de financiamiento ha llevado a que las universidades públicas recurran a fuentes de ingresos propios y estrategias de autofinanciamiento que limita su capacidad de ampliar cobertura y garantizar condiciones adecuadas para la permanencia estudiantil (Rubio & Chacón, 2023).

A la par de los altos niveles de deserción y las barreras estructurales por el financiamiento de la universidad pública, el modelo de financiamiento a través del endeudamiento también se convirtió en un factor para explicar la creciente inconformidad juvenil. Entre 2018 y 2021, el número de créditos aprobados por el ICETEX creció un 38% pasando de 35.405 a 46.184, lo cual refleja una dependencia progresiva de los estudiantes a esta forma de financiación. (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, 2023). Esta

dependencia del crédito educativo profundizó el descontento entre los jóvenes, quienes no sólo afrontaban condiciones de desigualdad para ingresar y permanecer en la educación superior, sino que además veían en el endeudamiento una carga injusta para ejercer su derecho a estudiar.

Otro ejemplo de movilización, respecto a dificultades señaladas en el sector educativo, fue la protesta estudiantil de octubre de 2011, que surgió como una de las manifestaciones recientes más significativas en Colombia. Esta manifestación reflejó la inconformidad de los jóvenes frente a un sistema que no garantiza el derecho a una educación equitativa y de calidad. La participación en las protestas del 2011 fue masiva en Bogotá, instituciones y entidades oficiales reportaron una asistencia entre 150.000 y 200.000 estudiantes hacia la Plaza de Bolívar, además de la participación de 32 universidades públicas (Expansión, 2011)

Las movilizaciones fueron impulsadas por la oposición a la reforma de la Ley 030 de 1992 propuesta por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Esta reforma, planteaba la privatización de Universidades Públicas, además de un modelo de financiación que incentivaba la deuda en el estudiante en lugar del financiamiento estatal, reduciendo las garantías de acceso a la educación superior para la población vulnerable (Cruz Rodríguez, 2012).

En consecuencia, como resultado del Paro Estudiantil de 2011, el 10 de noviembre el Congreso de la República de Colombia anunció el retiro de la reforma a la Ley 30 de 1992 tras la presión ejercida por la masiva movilización de estudiantes, docentes y centrales obreras que rechazaban la propuesta gubernamental (Cruz Rodríguez, 2012). Este acontecimiento representó una victoria para el movimiento estudiantil, ya que consolidó su papel como un actor clave en las demandas sociales en Colombia en los inicios del siglo XXI.

El paro de 2011 evidenció la capacidad organizativa y la incidencia del movimiento estudiantil en la agenda pública, lo que permitió el fortalecimiento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) como un espacio de articulación de las demandas estudiantiles (Cruz Rodríguez, 2012). Este proceso sirvió como antecedente para las futuras movilizaciones, como las protestas estudiantiles de 2018 y las jornadas de Paro Nacional de 2019 y 2021, en las cuales el rol del movimiento estudiantil se destacó por su protagonismo en las exigencias de derechos y reformas estructurales, particularmente en relación con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Las tensiones sociales generadas por los ciclos recurrentes de descontento social han llevado a que la protesta y la movilización sean un mecanismo político de participación para expresar las demandas en diversos sectores sociales (Archila, 2020). El fenómeno social de las movilizaciones y las protestas ha dado lugar a una figura muy particular, conocida como estallido social. Esto abre la posibilidad de hablar del periodo presidencial de Iván Duque (2018-2022).

Durante el mandato del Presidente Iván Duque, Colombia atravesó un período de gran agitación social, caracterizado por múltiples protestas que reflejaban el descontento de diversos sectores de la sociedad. Factores como la desigualdad económica, la implementación de políticas impopulares⁴, la respuesta estatal a las manifestaciones y el impacto de la pandemia del COVID-19 fueron elementos clave que alimentaron un clima de inconformidad. En este contexto, el concepto de estallido social cobró relevancia como una expresión de las tensiones acumuladas, manifestándose en una serie de protestas de gran magnitud en gran parte del país.

Diversas decisiones políticas, operativos militares y la poca representación del gobierno a los distintos sectores sociales incrementaron el malestar general. Un caso emblemático en el Gobierno de Iván Duque fue el bombardeo realizado en noviembre de 2019 en el departamento del Caquetá, contra un campamento de disidencias de las FARC. Inicialmente presentando como un operativo exitoso, se reveló que en el ataque murieron ocho menores de edad reclutados por los grupos armados ilegales (Sussmann, 2019). Este hecho generó una profunda indignación pública y reforzó las críticas hacia el uso desproporcionado de la fuerza en contextos sensibles del conflicto armado colombiano y en consecuencia la salida del Ministro de Defensa.

Adicionalmente, el gobierno de Duque fue cuestionado por su manejo de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016, Pese a que se proclamó una política de “Paz con legalidad” distintos sectores nacionales e internacionales señalaron un desfinanciamiento y debilitamiento de mecanismos claves como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el programa de sustitución

⁴ Según datos de la encuesta Invamer (marzo 2022), el 73% de los colombianos desaprobó la gestión del presidente Iván Duque. Esta tendencia se mantuvo desde abril de 2021, cuando su desaprobación supero el 70%. Además, una encuesta de Yamaha de junio de 2022 revelo que el 89% de los encuestados desaprobaba su gestión en temas de corrupción y manejo de la protesta social (Infobae, 2022)

voluntaria de cultivos ilícitos. A esto se sumó el incremento de asesinatos de líderes sociales, firmantes del acuerdo y defensores de derechos humanos. Según Indepaz, solo en 2021 fueron asesinados 171 líderes sociales, y 48 excombatientes (Indepaz, 2022). Esta situación reforzó una percepción de incumplimiento del Estado y debilitó la confianza de la ciudadanía, especialmente en los territorios históricamente marcados por la guerra.

1.3. La narrativa del estallido social⁵

Para entender el rol del movimiento estudiantil en el marco del denominado estallido social en Colombia, es necesario analizar el periodo de gobierno de Iván Duque, que tuvo una duración de cuatro años, desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 7 de agosto del 2022. Iván Duque llegó a la Presidencia, siendo el candidato más joven de la historia de Colombia con 42 años, representando al partido Centro Democrático.

Las elecciones presidenciales del 2018 en Colombia se llevaron a cabo en dos rondas. La primera vuelta se realizó el 27 de mayo, en la cual Iván Duque obtuvo 7.569.693 votos (39,14%), el segundo candidato con mayor cantidad de votos fue Gustavo Petro con 4.851.254 votos (25,08%) y el tercero fue Sergio Fajardo que obtuvo un total de votos de 4.589.696 votos (23,73%) (Registraduría Nacional, 2018). Dado que ninguno de los candidatos alcanzó el umbral del más del 50% de los votos. Se llevó a cabo una segunda vuelta entre los dos primeros candidatos. Esta se realizó el 17 de junio, en el cual Iván Duque resultó vencedor de las elecciones con un total de votos de 10.398.689 votos (53,98%), mientras que Gustavo Petro obtuvo 8.040.449 (41,81%) (Registraduría Nacional, 2018), de esta manera duque se convertiría en el presidente electo de Colombia.

El gobierno de Iván Duque se caracterizó por diversas críticas en relación con su gestión en varios ámbitos claves para el país. Entre los aspectos más cuestionados se encuentra el manejo del proceso de paz, en particular la implementación de los acuerdos con las FARC, lo que

⁵ Si bien a lo largo del texto se hace referencia al movimiento estudiantil en generales importante señalar que sus expresiones más vigorosas durante el estallido social de 2021 se concentraron en las principales capitales del país., especialmente en Bogotá, Cali y Medellín. No obstante, otras ciudades como Bucaramanga, Pasto, Barranquilla registraron una participación y fueron escenarios claves para la confrontación con las fuerzas del orden.

generó preocupaciones sobre su cumplimiento y efectividad. Asimismo, el incremento en los asesinatos de líderes sociales en distintas regiones del país evidenció desafíos en materia de seguridad y derechos humanos.

En el ámbito político y social, la administración de Iván Duque fue señalada por su respuesta a la protesta social, con un enfoque que priorizó la represión sobre el diálogo. Además, las propuestas de reformas en salud, pensiones y el mercado laboral generaron amplios debates y rechazo por parte de distintos sectores de la sociedad. En cuanto al ámbito de la educación, se evidenció un ciclo de protestas y demandas relacionadas con la crisis estructural de financiamiento de la educación superior pública y una reforma estructural al ICETEX.

La gestión de la pandemia de COVID-19 suscitó críticas, especialmente por la forma en que fueron atendidas las poblaciones más vulnerables, evidenciando deficiencias en la capacidad estatal para responder a la crisis sanitaria y económica. La crisis de la salud en Colombia se agravó con la llegada del COVID-19. A medida que la pandemia avanzaba, se reportó un retraso de hasta 30 días, en aproximadamente 62.000 pruebas (Foro Nacional por Colombia, 2020). La crisis sanitaria también reveló las consecuencias del desvío de recursos, el debilitamiento de los hospitales públicos y el deterioro de la red de aseguramiento territorial. Como resultado, la Federación Médica Colombiana reportó que en la última década se habían perdido aproximadamente 8.500 camas hospitalarias, lo que, en el contexto de pandemia, habría reducido la presión sobre el sistema de salud. Además, la falta de infraestructura obligó al traslado de numerosos pacientes a otras ciudades (Foro Nacional por Colombia, 2020).

La precarización laboral del personal de salud durante la pandemia fue una problemática evidente, marcada por el incumplimiento en la entrega de subsidios y la falta de mejoras en sus condiciones de trabajo. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), para septiembre de 2020 se habían registrado 67 fallecimientos y alrededor de 7.500 contagios entre trabajadores del sector mientras atendían a pacientes (Foro Nacional por Colombia, 2020). A estos problemas se suman la falta de insumos médicos y actos de discriminación. En conjunto, estos factores contribuyeron a una creciente desaprobación del gobierno y a una percepción de desconexión con las necesidades y demandas de la ciudadanía.

El movimiento estudiantil 2018.

El camino que llevó al estallido social de 2021, así como la resignificación y el rol del movimiento estudiantil en Bogotá en la lucha por la reforma del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), comenzó en 2018 con el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), en este espacio, se consolidaron los aspectos programáticos y organizativos del sector estudiantil con base en la dinámica política, donde se llevaron a la mesa de diálogo las demandas estudiantiles al Gobierno Nacional (Marun Burgos, 2021), y en donde las posiciones reflejaron la distancia entre el sentir del grupo estudiantil y el Gobierno.

Visto desde la perspectiva de Gurr (1968) y la teoría de privación relativa, la movilización estudiantil surge a partir de una percepción entre una brecha de desigualdad frente a la educación pública y el acceso al mismo y lo que realiza el gobierno para enfrentar esta problemática. En primer lugar, la falta de garantías en la educación pública, el persistente problema de acceso y calidad de la educación y las condiciones laborales de los docentes. En segundo lugar, las constantes represivas del ESMAD y abuso de poder frente a los manifestantes y por último, la poca participación que tiene este grupo de estudiantes en la toma de decisiones en la agenda pública.

Esta situación ha llevado a una radicalización del movimiento estudiantil, que no solo exige reformas estructurales en la educación, sino también garantías para la protesta pacífica y una mayor incidencia en la formulación de políticas públicas. La respuesta del gobierno, en muchos casos, ha sido insuficiente, lo que perpetúa la percepción de privación relativa y alimenta nuevas olas de movilización. En este contexto, las tensiones entre el Estado y el movimiento estudiantil se han convertido en un punto clave dentro del debate sobre democracia, derechos humanos y equidad social en Colombia.

La construcción de este espacio de diálogo entre los estudiantes y el gobierno nacional dio paso a la creación de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES). El movimiento estudiantil articulado en la UNEES, puso en debate el presupuesto para la educación pública, las condiciones estructurales de los espacios académicos, las condiciones de los estudiantes de las universidades públicas, la reestructuración del ICETEX para evitar el endeudamiento excesivo de los estudiantes, el cumplimiento del derecho a una educación

gratuita y de calidad, y la definición del Paro Nacional Universitario. Todo lo anterior desencadenó una serie de factores represivos en contra de la protesta social y la movilización estudiantil.

La creación de la UNEES permitió consolidar las demandas estudiantiles. Durante el segundo periodo del 2018, el principal logro de la movilización fue el aumento en el presupuesto base de las universidades estatales, con incrementos del 3,5 % en 2019, 4,0 % en 2020, 4,5 % en 2021 y 4,65 % en 2022. (Ministerio de Educación, 2018).

Las movilizaciones estudiantiles de 2018 en Bogotá no solo evidenciaron el desfinanciamiento estructural de la educación superior, sino que también revelaron las tensiones entre el ejercicio del derecho a la protesta y la respuesta represiva del Estado. Si bien las negociaciones con el gobierno permitieron asegurar un incremento progresivo del presupuesto para las universidades públicas, la represión ejercida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) evidenció una estrategia de control del orden público, basada en la confrontación y el uso de la fuerza, en lugar del diálogo y la concertación. En este sentido, la violencia policial se convirtió en un factor determinante para la radicalización del movimiento estudiantil, profundizando su carácter de resistencia frente a un modelo de gobernanza que criminaliza la protesta social en lugar de garantizar condiciones para su ejercicio legítimo.

Paro Nacional 2019.

El año 2019 consolidó un escenario en el que las demandas educativas se articularon con una serie de reivindicaciones de orden estructural, lo que permitió que el movimiento estudiantil trascendiera su carácter sectorial y se posicionara como un actor clave dentro de un descontento social más amplio. La crisis de legitimidad del modelo económico, las reformas laborales y pensionales impulsadas por el gobierno, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y la sistemática violencia contra líderes sociales y comunidades rurales se convirtieron en ejes fundamentales del Paro Nacional de 2019, el cual dio inició el 21 de noviembre de ese mismo año.

La primera gran movilización social de 2019 contó con la participación de centrales obreras, docentes, el movimiento estudiantil, grupos indígenas, mujeres, campesinos, comunidades afro y LGBT. El Paro Nacional en Colombia surgió como una manifestación de rechazo a una serie de medidas económicas y sociales promovidas por el gobierno de Iván Duque, conocidas por los convocantes como el "paquetazo". Estas políticas, que combinaban iniciativas en proceso de implementación con otras ya en vigor, apuntaban a profundizar el modelo neoliberal en el país (Archila, 2020).

Una de ellas fue la propuesta de reforma laboral, que contemplaba la posibilidad de contratación por horas, el establecimiento de un salario diferenciado según la región y la opción de pagar a los jóvenes por debajo del salario mínimo. Estas medidas afectaron la precarización laboral sin solucionar el problema de la informalidad.

Por otro lado, la reforma pensional sugería cambios como el aumento de la edad de jubilación, el incremento en las cotizaciones y la eliminación del régimen de prima media, estableciendo la obligatoriedad de la afiliación a fondos privados de pensiones. Esto generó preocupación, ya que implicaba que el acceso a una pensión dependería únicamente del ahorro individual, subordinado así este derecho a la rentabilidad del sistema financiero (Archila, 2020).

A la par de estas propuestas, el gobierno ya había puesto en marcha otras iniciativas, como la creación de un conglomerado financiero estatal que agrupaba 19 entidades del sector público. Dicha medida, aprobada dentro del Plan Nacional de Desarrollo, fue interpretada por los organizadores del paro como un paso previo a la privatización de estas entidades, además de generar preocupación por la posible reducción masiva de empleos en el sector estatal (Archila, 2020).

Las movilizaciones que comenzaron el 21 de noviembre se extendieron durante varios días, superando las expectativas tanto de los organizadores como del propio gobierno. En respuesta a la magnitud de la protesta, el Comité Nacional de Paro presentó el 26 de noviembre un documento con nuevas exigencias que ampliaban las demandas originales. Entre ellas destacaban la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y una reforma estructural de la Policía Nacional, la inclusión de organizaciones ambientales en la formulación de políticas ecológicas, la aprobación urgente de proyectos legislativos contra la corrupción y el cumplimiento de acuerdos previos entre el gobierno y distintos sectores sociales, como estudiantes, indígenas, campesinos y docentes (Archila, 2020).

La violencia y el uso excesivo de la fuerza de agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios durante el Paro Nacional se hicieron evidentes, un comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó que durante las jornadas de movilización del 21 al 24 de noviembre de 2019, existieron 25 casos de personas heridas, 831 casos de retención por parte de miembros de la fuerza pública, y un caso en el que un joven estudiante Dilan Cruz perdió la vida debido al impacto de un objeto contundente. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2019)

La Movilización Social en el Marco de la Pandemia.

El año 2020 estuvo marcado por diversas problemáticas, entre ellas la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, la recesión económica que profundizó la brecha de desigualdad y el aumento del desempleo como consecuencia del confinamiento y las medidas implementadas para frenar la propagación del virus. En este contexto, la gestión de la pandemia y la respuesta gubernamental a las demandas de los distintos sectores sociales no fueron percibidas como adecuadas durante el mandato de Iván Duque. Como resultado, múltiples sectores de la sociedad volvieron a manifestarse en las calles en busca de soluciones y medidas de apoyo que contribuyeran a mitigar los efectos de la crisis en Colombia.

La represión de la protesta en Colombia ha sido marcada por el abuso de la fuerza por parte de miembros de la policía, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbio, como se ha evidenciado en los dos años anteriores, tanto en el Paro Universitario del 2018 como el Paro Nacional 2019.

Ahora bien, el exceso de la fuerza por parte de miembros de la policía se hizo aún más evidente, pero un hecho que marcó un hito para el Estallido Social en el año posterior 2021, fue el asesinato de Javier Ordoñez el 9 de septiembre de 2020 y el abuso de la autoridad los días 10 y 11 de septiembre de 2020, dejando un saldo de 14 personas muertas, 75 personas heridas por arma de fuego, 43 personas con lesiones con arma corto punzante, 187 personas con otro tipo de lesiones en el marco de las movilizaciones. Además de 216 miembros de la policía heridos, 76 CAI destruidos y 51 buses zonales y 78 buses troncales afectados. (Negret Mosquera, 2021)

El Estallido social de 2021.

El estallido social de 2021 en Colombia, desencadenado inicialmente por una propuesta de reforma tributaria que afectaba de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, dio lugar a movilizaciones masivas y de carácter multifacético. Las demandas iban desde la lucha contra la violencia policial hasta la exigencia de un sistema de salud más equitativo y una educación pública de mayor calidad. Esta crisis no solo reveló el profundo malestar de grandes segmentos de la población, sino también una capacidad de acción colectiva que se extendió a diversos sectores y grupos sociales. Sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas y colectivos de mujeres, entre otros, se articularon bajo un propósito común de transformación social.

El 2021 fue un año de gran movilización social en todo el país. Colombia, golpeada por la crisis sanitaria del COVID-19, enfrentaba altas tasas de desempleo, un gobierno que no respondía a las demandas sociales y un fuerte rechazo a los actos de violencia policial perpetrados por miembros de la policía y el ESMAD en años anteriores. Todo esto condujo a que el 28 de abril de 2021, en Bogotá y en muchas otras ciudades del país, se generaran masivas movilizaciones como expresión del descontento generalizado frente al gobierno nacional.

El detonante inicial de las protestas de 2021 fue la presentación de dos reformas clave: la tributaria y la de salud. En primer lugar, la Reforma a la Salud (Proyecto de Ley 010 de 2020) generó un fuerte rechazo, ya que proponía aumentar el control de las EPS sobre la administración de los recursos y reducir la intervención del Estado en su regulación. Esto fue interpretado como un paso hacia la privatización del sistema de salud, lo que podía afectar a los hospitales públicos y limitar el acceso a la atención médica para millones de personas en el país.

Por otro lado, la Reforma Tributaria, denominada por el gobierno como “Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible”, fue propuesta por el Ministerio de Hacienda con el objetivo de aumentar el recaudo de impuestos para reducir el déficit fiscal generado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta reforma provocó un fuerte rechazo social, ya que las medidas tributarias planteadas afectan de manera desproporcionada a la clase media y a los sectores más vulnerables, que ya enfrentaban dificultades económicas debido al aumento del

desempleo y la desaceleración del crecimiento económico como consecuencia de la crisis sanitaria. Uno de los puntos más críticos de la reforma era el incremento del 19% en el IVA sobre productos de la canasta familiar y servicios públicos, así como la reducción del umbral para el pago del impuesto de renta en personas naturales.

Estas reformas, sumadas a la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia del COVID-19, junto con la criminalización de la protesta por parte de la fuerza pública en años anteriores, desencadenaron un estallido social. El 28 de abril de 2021, se convocaron masivas marchas y plantones en varias ciudades del país, exigiendo garantías reales para abordar los problemas estructurales que afectan a Colombia.

CAPÍTULO 2.

MARCO TEÓRICO: EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN EL ESTALLIDO SOCIAL DE 2021 VISTO DESDE EL ENFOQUE DE ACCIÓN COLECTIVA

2.1. La Movilización Como Expresión de la Acción Colectiva.

En este apartado se expondrán los enfoques teóricos de la acción colectiva y la protesta social propuestos por Sidney Tarrow, Mancur Olson y Alberto Melucci, los cuales permiten comprender el fenómeno de la acción colectiva y contextualizar las demandas que surgieron frente al Estado. Para ello, se abordarán diferentes categorías analíticas que permiten descomponer y analizar el papel del movimiento estudiantil en la protesta social tales como: las oportunidades políticas, la solidaridad compartida, propósitos populares, la creación de significado e identidad, el marco de acción colectiva, las estrategias de comunicación, los first movers o iniciadores, y los recursos organizacionales de los grupos.

Estas categorías se utilizarán para analizar cómo se estructura, se comunica y se sostiene la acción colectiva estudiantil en el contexto del estallido social en Colombia y su incidencia en la transformación del ESMAD. Desde la perspectiva de Sidney Tarrow, en su obra sobre la acción colectiva y los movimientos sociales, se destaca la importancia de las oportunidades políticas, los marcos de acción colectiva y las redes de movilización como elementos fundamentales para la organización y persistencia de la protesta.

Desde el enfoque de Sidney Tarrow define las oportunidades políticas como las condiciones estructurales del entorno político que facilitan o inhiben la acción colectiva (Tarrow, 1994). Estos cambios no generan por sí solos la movilización, pero crean un entorno más favorable para que los actores sociales perciban que sus demandas pueden ser escuchadas o efectivas. Las oportunidades políticas se manifiestan, por ejemplo, cuando se produce una apertura institucional hacia el diálogo, cuando se debilitan las capacidades represivas del Estado o cuando existen apoyos externos que legitiman la protesta. Tarrow sostiene que los movimientos sociales, son especialmente sensibles a estas condiciones estructurales, ya que interpretan el contexto político como una oportunidad para actuar (Tarrow, 1994).

En ese sentido, la oportunidad política no es un factor externo estático, sino una variable dinámica que los actores sociales interpretan activamente y aprovechan de forma estratégica. Es decir, no basta con que exista una apertura institucional o una crisis en el sistema político; lo importante es cómo los movimientos sociales leen las condiciones de su entorno y actúan en consecuencia de ello. Las oportunidades políticas surgen cuando el sistema político se vuelve vulnerable, accesible o permeable a la presión social, ya sea visto divisiones internas. En estos contextos, los movimientos sociales encuentran un espacio para proyectar sus demandas y ampliar la capacidad de incidencia en el debate público.

Las redes de movilización constituyen uno de los pilares en la teoría de la acción colectiva desarrollada por Sidney Tarrow. Estas redes hacen referencia a los vínculos sociales, organizativos y territoriales que conectan a individuos y colectivos, facilitando la difusión de ideas, la convocatoria a la acción y la sostenibilidad del movimiento (Tarrow, 1994). No se limitan a estructuras formales como sindicatos o partidos, sino que también incluyen relaciones informales como círculos estudiantiles, comunidades digitales y alianzas barriales. En este sentido, Tarrow sostiene que, sin redes activas de movilización, incluso las oportunidades políticas más favorables pueden desaprovecharse, ya que son estas redes de movilización las que permiten transformar la indignación individual en acción colectiva organizada (Tarrow, 1994).

Desde esta perspectiva, el estallido social de 2021 en Colombia puede entenderse como el resultado de una coincidencia de factores, incluidos el descontento social, las ventanas de oportunidad política y la capacidad organizativa de diversos actores, entre ellos el movimiento estudiantil. Esto, al integrarse a las dinámicas de movilización, no solo canalizó demandas propias del sector educativo, sino que también articuló una lucha más amplia en torno a la justicia social, la dignidad humana⁶, y los derechos humanos.

Por otro lado, Alberto Melucci enfatiza el carácter simbólico y cultural de los movimientos sociales, argumentando la creación de identidades colectivas y nuevos significados en el espacio público. En este sentido, la participación del movimiento estudiantil en el estallido social no solo tuvo un impacto en la agenda política, sino que contribuyó a la construcción de una identidad colectiva de lucha y resistencia (Melucci, 1999). A través de discursos y

⁶ Durante el estallido social en Colombia (2021) una de las frases más difundidas por los manifestantes fue: “*Hasta que la dignidad se haga costumbre*”. Este lema sintetizó el sentimiento colectivo de la lucha por un trato justo y humano, convirtiéndose en un símbolo de la protesta social

estrategias comunicativas, los estudiantes reforzaron su papel como actores de cambio, legitimando su participación en la esfera política y social más allá de sus reivindicaciones educativas.

Los aportes de Marcus Olson resultan importantes para comprender los dilemas y desafíos que enfrenta la acción colectiva, especialmente en lo relacionado con los costos de organización y coordinación. En su obra de *La lógica de la acción colectiva* (1965), Olson plantea que los individuos tienen actuar de manera racional buscando maximizar sus beneficios, lo que lleva al problema del *free rider*⁷ y la poca participación de algunos actores que buscan beneficiarse de los logros comunes sin asumir ningún costo.

En los escenarios de alta presión social, emergen actores que Olson denomina “first movers”, quienes, a pesar de los costos de la protesta social, deciden movilizarse y pueden desencadenar una participación más amplia. Asimismo, Olson destaca la importancia de contar con recursos organizativos y materiales para sostener una movilización eficaz, para entender cómo el movimiento estudiantil colombiano logró sostener su actuar durante el estallido social, mediante redes de apoyo, autogestión y alianzas con otros actores sociales de la movilización.

2.2. Sídney Tarrow: Oportunidades Políticas y Marcos de Acción Colectiva.

Sidney Tarrow ha sido una figura clave en el desarrollo de la teoría de los movimientos sociales contemporáneos, particularmente a través de su aporte sobre la acción colectiva contenciosa, un concepto que permite entender las dinámicas de conflicto entre actores sociales y el Estado. En su obra *El poder del movimiento* (1997) Tarrow sostiene que “el acto irrefutable que subyace a todos los movimientos sociales y revolucionarios es la acción colectiva contenciosa” (Tarrow, 1994, 19). Desde esta perspectiva, la acción colectiva no se limita a la mera coincidencia de interés, sino que además se expresa en formas organizadas de

⁷ De acuerdo con Olson (1965) el fenómeno del *free rider* es aquella situación en la cual un miembro del grupo percibe una utilidad de un bien colectivo, sin incurrir en ningún esfuerzo económico que aporte al colectivo para la consecución de dicho bien. Un *free rider*, es entonces considerado como un individuo racional que recibe un beneficio que es producto del aporte individual de los demás miembros del grupo al cual el pertenece, sin realizar su aporte individual dentro de la acción colectiva. Según Olson, es más probable que esta situación ocurra en grupos grandes (también denominados grupos latentes) en los cuales es más costoso y dificultoso establecer mecanismos de monitoreo y control personalizados que permitan determinar con claridad y pertinencia, quien, dentro del grupo, ha efectivamente contribuido para conseguir el objetivo de grupo.

movilización que desafían el orden establecido, cuestionan la autoridad y disputan espacios de poder en la arena pública.

Para Tarrow (1994), la acción colectiva se convierte en contenciosa cuando es impulsada por actores que carecen de acceso regular a los canales institucionales de participación, defienden reivindicaciones nuevas o no aceptadas y representa una amenaza fundamental para otro (p.19). Desde esta perspectiva, el movimiento estudiantil en Colombia durante el estallido social de 2021 encarna una forma de acción colectiva contenciosa, históricamente protagonizada por sectores juveniles con acceso limitado a los espacios formales de toma de decisiones. El movimiento estudiantil ha impulsado demandas que desafían las estructuras tradicionales del poder estatal, como la defensa del derecho a la educación, los Derechos Humanos, y en el caso particular del estallido social, la exigencia de una transformación profunda del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Esta mirada resulta especialmente útil para comprender el papel del movimiento estudiantil como actor político en contexto de crisis y conflictividad social. Lejos de ser un actor pasivo, el movimiento estudiantil ha demostrado una capacidad para articular demandas colectivas. Esta capacidad del movimiento estudiantil se observó en las asambleas estudiantiles en instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, donde se construyeron agendas comunes, se coordinaron movilizaciones y se definieron pliegos de exigencias. Igualmente, los estudiantes participaron en el comité de paro a nivel local y regional, articulando demandas con la de los otros sectores sociales.

Así la acción colectiva contenciosa se convierte en el marco a partir del cual es posible analizar cómo los estudiantes asumieron un rol activo en las disputas por el sentido de lo público y por el cumplimiento de los límites constitucionales en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. La respuesta del Estado a estas movilizaciones estuvo marcada por la intervención del ESMAD, consolidando un escenario de confrontación recurrente donde la protesta estudiantil es vista como una amenaza al orden público. Así, estas dinámicas entre el movimiento estudiantil y las fuerzas estatales siguen siendo un reflejo de las tensiones inherentes a la acción colectiva contenciosa en el país.

Desagregar el fenómeno de la acción colectiva nos lleva a hablar de un concepto particular y es la *movilización social*. La acción colectiva es utilizada para crear oportunidades políticas, además de movilizar y organizar escenarios de confrontación para crear identidades colectivas

que lleven a bienes comunes (Tarrow, 1994, 21). Desde la perspectiva de Sidney Tarrow (1994), la movilización social es un proceso en el que los actores colectivos aprovechan oportunidades políticas, utilizan repertorios de protestas y construyen redes de solidaridad para influir la agenda pública y en las instituciones del poder.

Si bien la acción colectiva es un punto de partida para entender la participación de distintos actores en la esfera pública, no toda acción colectiva deriva en un proceso de movilización social. Para que esto ocurra es necesario que existan redes de solidaridad, oportunidades políticas, y repertorios de acción que permitan articular demandas de manera sostenida en el tiempo (Tarrow, 1994). La movilización social, entonces, surge cuando la acción colectiva se organiza estratégicamente para incidir en la agenda pública y disputar espacios de poder. En el caso del movimiento estudiantil colombiano, su capacidad de movilización trascendió momentos coyunturales durante el estallido social del 2021. En este sentido, la relación entre acción colectiva y movilización social permite comprender como las protestas estudiantiles han generado cambios en el debate sobre el uso de la fuerza pública, influyendo en la reestructuración del ESMAD y en la discusión sobre los límites del Estado frente a la protesta social.

Para el desarrollo de la investigación con base al concepto de la acción colectiva que maneja Tarrow, se desarrollan dos categorías analíticas: las oportunidades políticas y el marco de acción colectiva. En primer lugar, está el concepto de estructura de oportunidad política, el cual hace referencia a *los factores que surgen de elementos como la apertura del sistema político, las divisiones dentro de las elites gubernamentales, la disponibilidad de aliados influyentes, y la legitimidad del Estado para ejercer represión.*

Tarrow argumentó que “los movimientos sociales no surgen simplemente porque la gente está descontenta, sino porque hay cambios en el contexto político que abren la ventana a oportunidades para actuar colectivamente” (Tarrow, 1994, 85). Los factores mencionados, crean ventanas de oportunidad que los movimientos pueden aprovechar estratégicamente, es decir, se convierten en condiciones que pueden modificar los costos y beneficios de la acción colectiva y que los actores leen e interpretan para decidir cuándo y cómo movilizarse.

En la segunda categoría de análisis en la investigación nos encontramos con el marco de acción colectiva, que se refiere a los esquemas interpretativos compartidos que permiten a los

actores sociales entender su situación, definir sus adversarios, legitimar sus acciones o movilizar a otros actores. Estos marcos de acción colectiva operan como un dispositivo de construcción de sentido que traducen problemas individuales en causas colectivas, y que permiten conectar con los valores, emociones y aspiraciones de amplios sectores de la sociedad (Tarrow, 1994). Para ser efectivos los marcos de la acción colectiva, deben ser culturalmente resonantes, emocionalmente movilizadores y políticamente viables.

Durante el estallido social de 2021, el movimiento estudiantil colombiano desplegó un marco de acción colectiva que trascendió las demandas tradicionales en torno a la educación pública. La narrativa construida situó al estudiante como sujeto político activo, defensor de los derechos humanos, crítico hacia el modelo neoliberal y las reformas que se planteaban en ese momento y una víctima directa de la violencia institucional. En este marco, el ESMAD no fue únicamente denunciado por su actuar, sino presentado como un símbolo estructural de la represión estatal y del silenciamiento de la juventud y en general de los manifestantes.

En este sentido, el movimiento estudiantil colombiano, no solo se movilizó contra una serie de medidas económicas o represivas, sino que logró construir un relato colectivo que vinculó la defensa de la educación pública con la crítica estructural al uso desmedido de la fuerza por parte del Estado, simbolizado en el accionar del ESMAD. A través de consignas, performances, discursos en redes sociales y vocerías en medios de comunicación, los estudiantes crearon un marco interpretativo que permitió resignificar la protesta como una lucha legítima por la vida, la democracia y los derechos fundamentales.

2.3. Melucci y La Acción Colectiva como Reflejo de Propósitos Plurales.

Alberto Melucci aporta una mirada hacia el estudio de los movimientos sociales al concebir la acción colectiva como una respuesta racional frente a los intereses comunes y los procesos simbólicos y comunicativos en el que los actores construyen identidades, significados y vínculos de solidaridad. Su teoría resulta acorde para este estudio, ya que puede ayudar a comprender las dinámicas de movilización y la articulación de significados simbólicos alrededor de lo ocurrido entre actores articulados de la sociedad y el ESMAD. Desde esta perspectiva, se puede resaltar su definición de acción colectiva, para después pasar

a dos categorías de análisis, a saber: Solidaridad compartida, y la creación de significado. Estas permiten abordar el estudio de caso desde las dimensiones culturales y relacionales que sustentaron la protesta estudiantil frente a la crisis social y el accionar del Estado a través del ESMAD.

Alberto Melucci redefine la acción colectiva, alejándose de las interpretaciones centradas únicamente en recursos materiales, estructuras de poder o racionalidad instrumental. En este sentido, para Melucci la acción colectiva debe entenderse como un proceso comunicativo y simbólico, donde los actores construyen identidad y formas de reconocimiento mutuo.

En lugar de asumir que los movimientos sociales emergen únicamente como respuestas automáticas a necesidades objetivas o condiciones estructurales desfavorables, Melucci (1999) propone un enfoque que privilegia el proceso de interpretación colectiva. Según este autor, los movimientos sociales surgen cuando grupos de individuos no sólo experimentan una situación como injusta, sino que construyen colectivamente un marco simbólico que les permite dotar de sentido a esa injusticia y definirla como una causa común que merece ser transformada (Melucci, 1999). Esta interpretación no es espontánea ni individual, sino que resulta de procesos comunicativos y culturales, en el que los actores, en este caso el movimiento estudiantil, negocian significados, articulan valores, y elaboran visiones compartidas del entorno. En este sentido, la acción colectiva no se reduce a una simple reacción frente a la opresión, sino que implica una construcción de identidades, significados y horizontes de cambio.

Para Melucci, la acción colectiva implica comunicación, por qué los movimientos sociales intentan transformar estructuras y así mismos significados sociales, en un espacio de resistencia cultural frente a los sistemas dominantes (Melucci, 1999). Así, los movimientos sociales buscan la visibilización de valores, subjetividades e identidades que han sido marginadas. En este sentido, la acción colectiva es un espacio donde se gesta alternativas al orden establecido en un plano simbólico y cotidiano

El *Estallido Social*, como bien lo menciona Melucci, es una expresión de las problemáticas estructurales de una sociedad que convergen entre actitudes individuales y colectivas, pero que prima el interés colectivo. Ahora bien, las expresiones de inconformidad frente a la situación pueden verse reflejada de muchas maneras, entre ellas la protesta social.

Las expresiones sociales se pueden dar a través del relacionamiento de los fenómenos de inconformidad frente a las crisis presentes, es una muestra de que el estallido social es un sistema reaccionario hacia un cambio estructural. Porque, más allá de mostrar la uniformidad, el Estallido social es capaz de generar un cambio a través de los movimientos que se conforman para luchar por el interés colectivo.

“Los movimientos son sistemas de acción en el sentido de que sus estructuras son construidas por objetivos, creencias, decisiones e intercambios, todos aquellos operando en un campo sistémico. Una identidad colectiva” (Melucci, 1943, 38)

La construcción de la identidad colectiva se da gracias a un constante devenir de actividades, encuentros y formas de ruta y movilizaciones de recursos que trazan un panorama grupal en el cual se plantean puntos comunes (Melucci, 1999). Dicho de otra manera, los entornos colectivos son de total importancia para trazar una hoja de ruta inicial para la movilización de recursos y en sí de los individuos. La protesta social se relaciona constantemente con los movimientos sociales, y se puede considerar como “un sistema de acción que conecta orientaciones y propósitos plurales” (Melucci, 1999, 38).

Las categorías de análisis que se desarrollan con los conceptos de Melucci son: la solidaridad compartida y la creación de significados. Para Melucci, los movimientos sociales no son simplemente agregaciones de individuos con interés comunes, sino que se convierten en un sistema complejo de relaciones donde se construye la solidaridad compartida (Melucci, 1999).

Estas solidaridades no son dadas ni automáticas, son emergentes de procesos comunicativos, afectivos y simbólicos que permiten a los actores reconocerse mutuamente como parte de una misma lucha (Melucci, 1999). La solidaridad compartida, en el pensamiento de Alberto Melucci, se trata de un vínculo emergente, que se construye en el tiempo mediante los procesos comunicativos. Esta solidaridad surge en espacios de encuentro donde los individuos, a través del diálogo, la acción conjunta y la confrontación simbólica con el orden establecido, logran reconocer mutuamente como parte de un “nosotros”.

En los contextos de protesta social o alta demanda de conflictividad, estos vínculos son importantes para sostener la acción colectiva frente a la represión, el desgaste y la

incertidumbre del panorama social. Para Melucci (1999), la solidaridad no se impone, sino que se negocia, se reafirma y se configura en la cotidianidad de la protesta, a través de la convivencia en las asambleas, las redes digitales, plantones, “cacerolazos”, ollas comunitarias, expresiones artísticas y distintas formas de interacción que fortalecen el tejido colectivo.

Como lo plantea Melucci, las solidaridades compartidas son un proceso que se construye en la interacción social. En el contexto de la protesta social, el movimiento estudiantil fue homogéneo, a pesar de estar conformado por estudiantes de universidades públicas y privadas, organizaciones juveniles, colectivos feministas, estudiantes indígenas y comunidades afrodescendientes. A pesar de sus diferencias ideológicas, de clase o regionales, lograron articular una identidad colectiva en torno a demandas comunes, como el rechazo a la violencia estatal, la exigencia de garantías en la protesta pacífica, la defensa a la educación como mecanismo de desarrollo y ascenso social, y el rechazo a las reformas que se venían planteando desde el Gobierno Nacional.

Uno de los aportes de Melucci es su énfasis en el carácter simbólico de la acción colectiva. Para este autor, los movimientos sociales no solo buscan transformar estructuras materiales, sino que también actúan en el plano cultural, como productores de sentido (Melucci, 1996). En este marco, los actores movilizados cuestionan los códigos culturales dominantes, resignifican conceptos clave como la protesta, democracia o autoridad, y proponen nuevas formas de entender y habitar la vida social (Melucci, 1999). Esta capacidad simbólica varía según la forma de organización, el contexto y los repertorios de acción, y se expresan en prácticas como la creación de lenguaje propio, la transformación estética del espacio público, la reivindicación de narrativas históricas y la recuperación de símbolos colectivos.

La creación de significado permite a los movimientos sociales articular una identidad colectiva coherente y construir marcos interpretativos compartidos que dotan de sentido la acción (Melucci, 1996). En palabras de Melucci: “Los movimientos sociales son portadores de códigos culturales alternativos que desafían las reglas de juego y ofrecen visiones distintas de la realidad” (Melucci, 1996, 30). Esta producción simbólica se manifiesta en múltiples expresiones como se han mencionado anteriormente: desde los grafitis, el arte urbano, canciones, asambleas y un uso particular de las redes sociales. En el caso del movimiento estudiantil colombiano. Estas expresiones resignifican el acto de protesta como una forma legítima de participación democrática, y como un acto de resistencia cultural frente a la

represión estatal, reconfigurando el imaginario de lo político y posicionando nuevos lenguajes para narrar el conflicto.

La construcción de estos significados colectivos permite crear espacios para plantear escenarios multitudinarios con base a las exigencias sociales frente a situaciones que afectan el bienestar ciudadano, como en el caso de Colombia a través de su reforma tributaria, la crisis de una pandemia como el COVID-19, su reforma al sistema de salud y luego con base a la violencia durante las jornadas de protestas que pedían mejores condiciones sociales y económicas en los sectores más vulnerables de la población

2.4. Repertorios de Movilización y Estrategias de Comunicación en la Acción Colectiva: Charle Tilly.

Comprender la relación entre la protesta y los movimientos sociales, es posible a partir de la idea según la cual “los movimientos sociales son organizaciones globales formadas por diferentes grupos de interés” (Tilly & Wood, 2009, 17). En este sentido, los movimientos sociales no solo son el resultado de la acumulación de los intereses comunes, sino de un proceso colectivo donde los actores movilizados configuran una serie de repertorios de acción y desarrollan estrategias de comunicación para consolidar y expandir su mensaje a través de diferentes canales.

En primer lugar, los grupos de interés que convergen y se construyen a lo largo de la protesta social consolidan y concentran las ideas y los posibles puntos de vista sobre los temas que están siendo tenidos en consideración. En segundo lugar, cada individuo es libre de compartir sus opiniones y tomar decisión de ser partícipe a las ideas de los grupos de intereses que se crean a través de los diferentes procesos colectivos. Aun así, teniendo en cuenta estas dos consideraciones, la protesta social cumple con el mismo objetivo de generar un cambio en torno a una crisis generalizada.

Los movimientos sociales son la consolidación de diferentes ideas en grupos de intereses, como menciona Tilly (2009), y son, en este sentido, el resultado de tres elementos:

- “Un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas.
- El uso combinado de la siguiente forma de acción política: Creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, procesiones solemnes, manifestaciones, peticiones y declaraciones en los medios públicos.
- Manifestaciones públicas, y concertadas (Valor, unidad, número y compromiso)” (*WUNC por sus siglas en inglés*) (Tilly & Wood, 2009, 22)

Los elementos mencionados anteriormente tienen relevancia en la protesta y en el actuar social del movimiento estudiantil durante el tiempo que considera este trabajo para el análisis. En el primer punto, por ejemplo, el esfuerzo público se da a través de las concentraciones en plazas públicas, puntos de encuentros estratégicos, o simples cacerolazos de carácter colectivo para manifestar los puntos de quiebre. El segundo punto, es un actuar ciudadano en el cual ya se movilizan por vías de hecho, es decir, concretan y hacen públicas sus inconformidades a través de los medios de comunicación, realizan diálogos entre las comunidades y el gobierno para complementar puntos, comunidades y así lograr soluciones para la comunidad y en sí generar vías para llevar la inconformidad a la vida pública. Por último, el actuar masivo de los individuos para formar colectivos fuertes que luchan para comprender y reivindicar los derechos que han sido vulnerados.

La protesta social se articuló entonces en torno a la exigencia de una transformación profunda del aparato de seguridad, cuestionando los límites del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Un ejemplo claro es como el movimiento estudiantil, utilizó la movilización como una herramienta para disputar políticas educativas y también sociales, así como para denunciar consistente y sostenidamente (casi 90 días de acciones concertadas) la represión estatal. En este sentido, la reestructuración del ESMAD en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) se inserta en un escenario donde la confrontación entre el Estado y los movimientos sociales se mantuvo vigente por varios meses.

En este marco, es posible abordar dos categorías analíticas para entender la naturaleza de los movimientos sociales en la protesta social: los repertorios de movilización y las estrategias de

comunicación. Estas categorías desarrolladas por Tilly proporcionan las herramientas para analizar como los actores sociales configuran sus acciones y como se comunican para movilizar a más individuos hacia un cambio.

Una de las principales contribuciones de Charles Tilly al estudio de los movimientos sociales es la noción de repertorios de movilización, esto entendido como el conjunto limitado, pero históricamente moldeado de formas de acción colectiva que los actores sociales utilizan para expresar demandas y ejercer presión sobre las autoridades. Estos repertorios no surgen de manera espontánea, sino que se consolidan como respuestas a contextos sociales políticos y culturales específicos (Tilly & Wood, 2009).

Como lo señala Tilly, “los repertorios de acción colectiva no son inventados de la nada, se desarrollan históricamente como una respuesta a oportunidades o amenazas políticas concretas” (Tilly & Wood, 2009). Esto significa, que los movimientos sociales recurren a formas de protesta ya conocidas, en el caso colombiano durante las protestas de 2021, el movimiento estudiantil activó una variedad de repertorios que incluyeron marchas, cacerolazos, bloqueos viales, y ocupaciones simbólicas del espacio público. Estas acciones permitieron visibilizar las demandas y reflejaron un amplio abanico de intervenciones en clave de protesta que le permitieron a su vez conectar con otros sectores sociales.

La otra categoría de análisis, para comprender las dinámicas de los movimientos social son las estrategias de comunicación, entendidas como los mecanismos mediante los cuales los actores movilizados logran proyectar sus demandas, visibilizar las causas y construir legitimidad ante diversos públicos (Tilly & Wood, 2009). La comunicación se convierte así en una herramienta estratégica no solo para difundir información, sino para disputar significados, sensibilizar a la opinión pública, y fortalecer la cohesión interna del movimiento social.

En palabras de Tilly, “los movimientos sociales necesitan mostrar al público externo que existen, que tiene apoyo y que sus demandas son legítimas. Esto requiere una comunicación constante, estratégica y visible” (Tilly & Wood, 2009). Desde esta perspectiva, la comunicación no solo cumple una función informativa, sino que se convierte en una herramienta de legitimación política, y de una construcción de una identidad colectiva (Tilly & Wood, 2009).

En el contexto de la protesta social en Colombia, el movimiento estudiantil desplegó una amplia gama de estrategias comunicativas que incluyeron las redes sociales, transmisiones en vivo, carteles, murales y actos culturales. Estas herramientas permitieron amplificar la voz de quienes protestaban al denunciar la represión estatal y el uso excesivo de la fuerza. La difusión constante de contenido desde múltiples plataformas digitales sirvió para informar, y para movilizar emociones y construir una narrativa sobre el estallido social de Colombia de 2021. Como señala Tilly (2009) la visibilidad y la capacidad de sostener una presencia pública activa son fundamentales para que un movimiento social gane fuerza y convoque apoyo, lo cual fue evidente en la forma en que el movimiento estudiantil articuló sus demandas y logros en la agenda pública.

2.5. Mancur Olson y la Lógica de la Acción Colectiva: First Movers y Homogeneidad del Grupo.

El enfoque de Mancur Olson (1965) parte de una crítica a la idea de que los intereses comunes bastan para explicar la movilización colectiva. En su obra “La Lógica de la Acción Colectiva” Olson sostiene que, incluso cuando un grupo tiene objetivos compartidos, no todos sus miembros están dispuestos a participar activamente en la consecución de esos fines, especialmente si los beneficios son colectivos y no excluyentes (Olson,1992). Esta perspectiva, plantea que la acción colectiva requiere superar obstáculos vinculados a la racionalidad individual, ya que los individuos tienden a evaluar costos y beneficios antes de involucrarse en una causa común. En este contexto la movilización efectiva depende de factores como los incentivos, la estructura o tamaño del grupo, y la presencia de actores claves (Olson,1992)

Desde esta lógica, se derivan dos categorías analíticas para comprender el comportamiento del movimiento estudiantil durante el estallido social de Colombia de 2021. La primera categoría son los denominados First Movers, conocidos como aquellos individuos o grupos que actúan asumiendo los mayores riesgos en el marco de un proceso de acción colectiva. La segunda categoría de análisis es la homogeneidad del grupo, entendida como un factor que facilita la coordinación y reduce los costos de la acción colectiva.

Ambas categorías permiten analizar cómo se activa la participación en escenarios de movilización de grupos e incluso escenarios de protesta, y por qué ciertos sectores, como el estudiantil, logran movilizarse a pesar de los obstáculos que plantea el actuar individual.

Los First Movers en la acción colectiva desempeñan un papel en la consolidación de los movimientos sociales, ya que como se menciona anteriormente son los primeros en asumir los costos y riesgos significativos para movilizar a otros actores hacia causas en común. En la teoría de la acción colectiva de Olson, estos individuos o grupos son fundamentales para poner en marcha la protesta y demostrar que la movilización es posible, incluso frente a los altos costos personales (Olson, 1965). En el caso del movimiento estudiantil colombiano durante el estallido social de 2021, los First Movers jugaron un papel importante en la creación de olas de resistencia, desafiando abiertamente la represión estatal y estableciendo las bases para la expansión de las movilizaciones.

Las motivaciones de los First Movers, se fundamentan en convecciones profundas relacionadas a la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de visibilizar la represión y la desigualdad estructural dentro de la sociedad colombiana.

Los primeros manifestantes del movimiento estudiantil, en su mayoría jóvenes, fueron movidos por la urgencia de transformar el sistema educativo, y visibilizar la intervención violenta de miembros de la Policía en especial del ESMAD. La motivación ideológica fue un incentivo para que los individuos se lanzaran a la acción a pesar de los riesgos inherentes, como la posible represión o la criminalización de la protesta. Además, los incentivos selectivos, como el reconocimiento social al estar involucrado en una causa justa, jugaron un rol clave para movilizar a los primeros actores, quienes no cuentan con los beneficios materiales que se asocian a otras formas de acción colectiva (Olson, 1965).

El rol de los First Movers es importante para la consolidación del movimiento, ya que marcan el inicio de un proceso de movilización que se amplifica con el paso del tiempo. Estos actores inicialmente en líderes simbólicos del movimiento, aun sin tener un verdadero liderazgo formal, La capacidad de movilizar a otros a pesar de los obstáculos les otorga una autoridad simbólica que fortalece la legitimidad del movimiento (Olson, 1965). La capacidad de generar confianza contribuye a que otros actores se unan a la causa colectiva y así fortalecer la protesta social.

El componente estratégico de los First Movers está marcado por los altos costos y riesgos que asumen. Estos actores inicialmente enfrentan la represión directa del Estado y asumen la responsabilidad de mostrar al resto de la sociedad que la protesta puede ser una herramienta legítima de cambio. De esta manera, su credibilidad y el éxito parcial en sus primeras acciones contribuyen a fortalecer la confianza en el movimiento. A través de las estrategias de comunicación, los First Movers logran visibilizar sus demandas y fortalecer el apoyo popular a las causas, creando una red de solidaridad que crece con el tiempo.

La homogeneidad del grupo. Es un factor importante en la teoría de acción colectiva propuesta por Mancur Olson. En términos generales, se refiere al grado en que los miembros de un grupo comparten características, intereses y objetos comunes. La homogeneidad facilita la coordinación y reduce los costos de la acción, ya que los individuos dentro de un mismo grupo homogéneo son más propensos a confiar en los demás y alinear con un mismo propósito (Olson, 1965).

En el contexto del movimiento estudiantil, colombiano, durante el estallido social de 2021, la homogeneidad jugó un papel importante al consolidar las demandas por las cuales se estaba haciendo pie de lucha y la cooperación de distintos actores sociales para la expansión y la sostenibilidad de la protesta. Los estudiantes se unieron bajo demandas comunes relacionadas con la transformación del ESMAD, la educación, condiciones de vida digna y la protección de sus derechos frente a los actos de represión policial. La homogeneidad permitió una coordinación eficaz entre los diferentes grupos estudiantiles, lo que resultó en una mayor unidad dentro del movimiento. Esto ayudó a consolidar una agenda en común y evitar conflictos internos que debilitaran la acción colectiva.

Además, la homogeneidad en términos de identidad colectiva contribuyó al fortalecimiento del movimiento estudiantil. La identidad de los estudiantes con una causa común, el hecho de que muchos jóvenes compartían una misma experiencia de formación educativa y de pertenencia a un sector vulnerable ante las políticas estatales generó una sensación de solidaridad que permitió la expansión de la protesta. Otro aspecto relevante de esta categoría de análisis es que los individuos tienden a compartir valores y opiniones similares, lo que reduce los costos de coordinación. Esto resultó evidente en las primeras etapas del estallido social, donde los grupos estudiantiles, al compartir una visión común, fueron capaces de organizarse rápidamente y coordinarse sin grandes dificultades. Esto permitió una resistencia

rápida y eficiente frente a las represiones del Estado y contribuyó a la visibilidad del movimiento, que se extendió rápidamente por todo el país.

Finalmente, la homogeneidad del grupo no solo se refiere a la identidad y los intereses comunes, sino también a la construcción de una narrativa colectiva. Los estudiantes, a través de diversos medios de comunicación, lograron articular una historia compartida que fortaleció su identidad colectiva y proporcionó una voz unificada frente a las autoridades. Esta narrativa, que fue construida a través de manifestaciones, protestas y campañas en redes sociales, ayudó a consolidar la cohesión interna y a presentar una imagen fuerte y coherente ante la sociedad y el Estado.

CAPÍTULO 3.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES FINALES

3.1. Incidencia Política.

La participación del movimiento estudiantil durante el estallido social de 2021 en Colombia representó una forma de acción colectiva con un fuerte impacto en el escenario político e institucional. Su incidencia se expresó en la ocupación de los espacios públicos y en la articulación de demandas sociales, que consolidaron cambios, como la transformación del Escudaron Móvil Antidisturbios (ESMAD) en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Este capítulo inicia con una reflexión sobre el concepto de incidencia política, entendido como el conjunto de acciones estratégicas desarrolladas para actores sociales que buscan influir en la toma de decisiones, en el diseño de políticas, o en la modificación de estructuras institucionales (*Manual Básico De Incidencia Política. 2016*) La incidencia puede clasificarse en diversos tipos: incidencia directa, que involucra el diálogo formal con actores institucionales; incidencia indirecta, orientada a influir en la opinión pública para generar presión sobre quienes toman decisiones, y finalmente, la incidencia simbólica, que busca transformar sentidos comunes, imaginarios, y marcos culturales desde los cuales se entienden las demandas sociales (*Manual Básico De Incidencia Política. 2016*)

En primer lugar, se puede decir que la incidencia directa se manifestó en los espacios institucionales en los que el movimiento estudiantil tuvo voz para demandar la reforma al ESMAD. (Stephania Grajales Zárate & Daniel Felipe Caicedo, 2022) Un ejemplo concreto fue la Mesa de Diálogo Nacional, donde representantes estudiantiles participaron junto a miembros del gobierno, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Allí, exigieron públicamente la erradicación de la violencia institucional, y la revisión de protocolos en el accionar del ESMAD. Además, en sesiones públicas del Congreso y en sesiones de Comisiones de Derechos Humanos, organizaciones estudiantiles como la Asociación Colombiana de Representes Estudiantiles (ACRESS) denunció sistemáticamente el uso excesivo de la fuerza y planteó propuestas concretas para la reforma estructural del

escuadrón antidisturbios, como por ejemplo la veeduría y observación permanente de autoridades políticas durante las jornadas de protesta.

En cuanto a la incidencia indirecta, el movimiento estudiantil fue importante para la articulación de protestas masivas como la del 28 de abril de 2021, que iniciaron el Paro Nacional. Estas movilizaciones, organizadas inicialmente por sectores juveniles y estudiantiles, rápidamente escalaron a una propuesta de escala nacional. A través de bloqueos, concentraciones en universidades públicas y actividades en espacios como el Portal de la Resistencia en Bogotá (anteriormente conocido como Portal Américas), los estudiantes lograron mantener la atención pública y mediática sobre la violencia policial y la necesidad de reformar las instituciones encargadas del orden público (Stephania Grajales Zárate & Daniel Felipe Caicedo, 2022). Un discurso que tuvo un desarrollo protagónico durante la duración del denominado estallido social.

La presión ejercida a través de las redes sociales también fue fundamental para documentar en tiempo real los abusos policiales, compartir testimonios de víctimas de la violencia policial, y presionar a medios y organismos internacionales para intervenir. El uso de *hashtags* como *#Nosestanmatando* o *#ReformapolicialYa* generaron una ola de solidaridad que trascendió a lo largo de la protesta para visibilizar el accionar sistemático y violento de agentes de la policía y el escuadrón antidisturbios.

Finalmente, la incidencia simbólica permitió al movimiento estudiantil transformar el imaginario colectivo sobre la protesta social y el uso de la fuerza estatal. A través de murales y acciones artísticas, se denunció la violencia institucional y se promovió una nueva narrativa basada en la dignidad humana, el derecho a la protesta pacífica, y la defensa de la vida. La incidencia simbólica sirvió para conmemorar y resignificar a las víctimas de la violencia policial, como por ejemplo la Velación Nacional, donde jóvenes y ciudadanos salieron a rendir homenaje a las víctimas del abuso sistemático en la protesta social.

Dando una idea general de lo que se entiende por incidencia en este trabajo, a continuación, se desarrolla un análisis en el que se intenta establecer, dada la literatura presentada en el capítulo 2, un relato causal a partir del cual es posible analizar la incidencia que tuvo el movimiento estudiantil en 2021 para el proceso de reforma del denominado ESMAD.

3.2. Cuatro razones para entender la incidencia del movimiento estudiantil en el marco del estallido social de 2021 y la reforma del ESMAD.

3.2.1. Primera Razón: Aprovechamiento de la EOP y el Nuevo Marco de Acción Colectivo.

Durante el estallido social de 2021 en Colombia, el movimiento estudiantil emergió como uno de los actores más visibles y organizados en el escenario de la protesta social. Su capacidad de incidir no puede entenderse sin considerar las Estructuras de Oportunidades Políticas planteadas por Tarrow, en este sentido, estas oportunidades se convierten en momentos en los que el sistema político se vuelve más permeable a las demandas sociales debido a las crisis internas y la pérdida de legitimidad de sus instituciones. En el caso colombiano, factores como el descontento por la reforma tributaria, la reforma a la salud, la gestión de la pandemia y la violencia policial, abrieron un escenario político inestable que fue percibido y aprovechado por los sectores de la comunidad estudiantil que se estaban movilizandando.

El movimiento estudiantil supo leer esta coyuntura como una oportunidad para avanzar en demandas históricas, entre ellas, la exigencia de desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). A partir de esta apertura, se activó una dinámica de movilización que incluyó la organización de asambleas estudiantiles, la coordinación con otras plataformas sociales, la elaboración de comunicados y manifiestos, y una fuerte presencia en redes sociales para denunciar los abusos de la fuerza pública. Este aprovechamiento táctico de las EOP se tradujo en una presión hacia el gobierno, visibilizando la crisis de legitimidad de las instituciones del orden público y ampliando el debate sobre el uso de la violencia estatal.

En este contexto de protesta social se puede decir que se identificó y aprovechó una estructura de oportunidad política caracterizada por el debilitamiento de la legitimidad del gobierno nacional, especialmente del entonces Presidente Iván Duque, cuyas decisiones eran ampliamente rechazadas por la opinión pública. La presión internacional por los informes de violación de Derechos Humanos por parte del ESMAD y la Policía Nacional, aumentó el costo político sobre el uso de excesivo de la fuerza. Adicionalmente, Una fragmentación

institucional de las ramas del poder público, abrió espacios para el debate y la interlocución sobre lo sucedido en las protestas. Y, por último, el aumento del respaldo social a la protesta, especialmente por parte de medios alternativos, plataformas de Derechos Humanos, colectivos campesinos e indígenas, y sindicatos que ampliaron la voz de la demanda del movimiento estudiantil en relación de la erradicación del abuso de la fuerza policial contra estudiantes.

El movimiento estudiantil logró transformar la represión estatal en un recurso movilizador, al convertir cada caso de abuso policial en un detonante para nuevas expresiones de protesta, lo que muestra una comprensión estratégica de la EOP: no se trató únicamente de identificar el momento oportuno, sino de saber convertirlo en fuerza organizativa y narrativa.

El estallido social de 2021 fue una disputa por el significado social de lo político, y lo justo. El nuevo marco de acción colectiva propuesto por los estudiantes ofreció una comprensión de las dinámicas del movimiento a través de la ampliación de un propósito más amplio que las matrículas, los cupos, o la financiación. En el caso colombiano, el movimiento estudiantil no se limitó a exigir la reforma del ESMAD como un cambio estructural, sino que enmarcó esta demanda en términos de dignidad, justicia, derechos humanos y transformación cultural. Esto significó en un nuevo marco de acción colectiva que vinculó la lucha contra el uso excesivo de la fuerza con otras causas estructurales como la desigualdad y la criminalización de la protesta.

En este marco, la exigencia de transformación del ESMAD en la UNDMO no fue un punto de partido, sino una construcción progresiva impulsada por la movilización estudiantil. La forma en que se articularon los repertorios de protesta refleja una comprensión estratégica para la construcción de un nuevo imaginario sobre la protesta y la seguridad.

Así, el movimiento estudiantil no solo actuó como sujeto movilizado, sino como agente de sentido y presión política. Supo interpretar la coyuntura, articular un discurso legitimador de sus demandas y movilizar recursos simbólicos y organizativos que terminaron por incidir en la transformación del ESMAD y la creación de la UNDMO. Esta experiencia reafirma el valor del análisis del marco de acción colectiva como herramienta clave para comprender los procesos de incidencia desde la acción colectiva.

3.2.2. Segunda Razón: La dignidad como propósito colectivo y reflejo de la ampliación de significado.

Para el movimiento estudiantil, la bandera de la dignidad, entendiéndola desde la perspectiva de Melucci, se convirtió en un eje transversal de la protesta social que articuló distintos sectores sociales. En ese marco, el movimiento estudiantil no solo sumó una consigna a la protesta social, sino que también ayudó a ampliar y resignificar su contenido, dotándola de sentido político, ético y emocional. La dignidad, más que una consigna abstracta, se convirtió en un propósito colectivo que guió la acción colectiva y simbólica de los manifestantes.

En el caso del movimiento estudiantil en Colombia, la dignidad se expresó de distintas maneras. En primer lugar, la dignidad frente al trato estatal, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros del Escuadro Antidisturbios y la Policía Nacional. Las denuncias por el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el acoso sexual, las lesiones oculares, y las desapariciones, posicionaron las demandas estudiantiles como prioritarias en la agenda de la opinión pública y algunos sectores del gobierno.

Los hechos de represión estatal fueron resignificados en el contexto de la protesta social, a lo cual su respuesta se convirtió en una narrativa de dignidad a través de mensajes claros como “La dignidad no se negocia” “somos estudiantes no delincuentes” y “hasta que la dignidad se haga costumbre” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2024), dando paso al debate sobre su desmonte y posterior transformación en la UNDMO.

En segundo lugar, la dignidad en la lucha por condiciones de vida justa: Si bien, el estallido social se detonó por una reforma tributaria, y una reforma a la salud, las demandas estudiantiles rápidamente se articularon con la de jóvenes sin acceso a empleo, salud o educación. En los espacios de protesta, la voz estudiantil, se solidarizó con otros actores populares para expresar que el problema era estructural: la exclusión, la pobreza, el abandono estatal, eran formas de violencia que también negaban la dignidad humana. Esta arista de la dignidad, se ancló con la idea de que una vida digna es aquella en la que se puede acceder a derechos básicos como salud, educación y oportunidades sin exclusión ni desigualdad.

En tercer lugar, se puede decir que hay incidencia del movimiento estudiantil debido a que este grupo de jóvenes estudiantes logró posicionar la dignidad como narrativa integradora: esta idea permitió articular agendas que tradicionalmente habían sido tratadas por separado en

un mismo escenario de protesta, demostrando que podían coexistir las exigencias a una mejor educación, a la brutalidad policial, al rechazo de las reformas estructurales planteadas por el gobierno, y el reclamo por los derechos que se han vulnerado. En este sentido, el movimiento estudiantil logro tener una narrativa amplia que conectó distintas luchas bajo una misma bandera ética: la defensa de la dignidad.

La ampliación de los significados corresponde a una de las nuevas características centrales de los nuevos movimientos sociales, no se trata únicamente de demandas materiales, sino de batallas por el sentido, luchas por el reconocimiento y por nuevas formas de convivencia (Melucci,1999). La dignidad, en este caso, funciona como un marco simbólico común, que permitió que el movimiento estudiantil se vinculara emocional, política y estratégicamente con el resto de los actores del estallido social para entablar diálogos y acciones orientadas a la reforma de dicha unidad policial.

3.2.3. Tercera razón: Organización y sostenibilidad de los repertorios de protesta y comunicación del movimiento estudiantil.

La fuerza del movimiento estudiantil colombiano en el contexto del estallido social de 2021 desplegó una amplia gama de repertorios de movilización como se vio con Charle Tilly que respondieron a la coyuntura, pero también a formas de organización construidas previamente en ciclos de protestas anteriores, como el Paro Nacional de 2018 o las marchas estudiantiles de 2011 y el 2019. En este contexto, la categoría de repertorios de acción colectiva permite identificar como estos actores recurrieron a tácticas y herramientas como las marchas, plantones, bloqueos viales, y simultáneamente innovaron estrategias comunicativas para sostener y captar apoyo social como el uso mediático de las redes sociales

Uno de los rasgos distintivos del movimiento estudiantil en el 2021 fue su capacidad de diversificar los repertorios de protesta. Lejos de depender exclusivamente de marchas tradicional se incorporan acciones como: performances artísticos a través de la danza, el teatro y el grafiti. Además de cacerolazos, cadenas humanas, pancartas en puentes y la ocupación simbólica del espacio público. Estas formas de expresión facilitaron una conexión emocional con distintos sectores sociales, las dinámicas organizativas entre los sectores sociales fue clave

para legitimar su accionar ante la opinión pública y resistir los intentos de criminalización de la protesta por parte del Estado colombiano.

A la par de los repertorios de movilización en las calles, el movimiento estudiantil desarrollo estrategias comunicativas, digitales y simbólicas. Entendieron que la lucha y la resistencia se podía jugar en diferentes ámbitos y usaron las herramientas digitales para visibilizar las demandas y la criminalización de la protesta durante el Paro Nacional de 2021. El uso de herramientas como Twitter, Instagram, TikTok fueron importantes para difundir y denunciar el abuso de autoridad por parte del ESMAD que se estaba presentando en el territorio nacional, las transmisiones en vivo y el uso de videos compartidos a las redes sociales evito la censura y visibilizo la violencia estatal en el margen de la protesta social. Como se menciona anteriormente y con base a la creación de significados, los hashtags se volvieron importantes para resignificar lo ocurrido en las calles en el Paro Nacional de 2021.

La duración del Paro Nacional del 2021 y la resistencia en puntos como el Portal de la Resistencia en Bogotá (Portal Américas), Puerto Rellena en Cali y en las universidades públicas, fueron gracias a una organización interna sólida y mecanismos de sostenibilidad ya que a partir de la cooperación se organizaron puestos médicos, ollas comunitarias, acompañamiento legales de organizaciones de derechos humanos y comités de dialogo que establecieron la autogestión de recursos para el sostenimiento de la protesta en Colombia.

Finalmente, los repertorios y las estrategias comunicativas no fueron solo medios de acción sino formas de construir legitimidad frente a la opinión pública (Lucero Giraldo Marín & Bibiana Magaly Mejía, 2011). Así mostrar la creatividad, disciplina, solidaridad, y voluntad de diálogo, el movimiento estudiantil logro una imagen favorable ante muchos sectores sociales, lo cual fue clave para la incidencia en la transformación del ESMAD.

3.2.4. Cuarta razón: First Movers y la homogeneidad del movimiento estudiantil

La efectividad de los repertorios de protesta y las estrategias comunicativas del movimiento estudiantil presentadas por Mancur Olson no pueden entenderse sin considerar la participación de actores que impulsaron la movilización desde su primera fase. Estos primeros

en actuar, conocidos como los First Movers, desempeñaron un papel importante al asumir los costos del aparato estatal con base a su represión en la protesta social. Su iniciativa permitió consolidar en primer lugar las demandas sobre las reformas que se plantaban desde el gobierno nacional y después a visibilizar el abuso y exceso de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional y el escuadrón antidisturbios. Además, la homogeneidad del grupo estudiantil marco y facilito los términos de identidad y los sentidos compartidos para movilizarse hacia una misma causa. Esta combinación de liderazgos y cohesión interna fortaleció la capacidad del movimiento para resistir a la represión estatal y poner en la agenda y el debate público la reestructuración del escuadrón antidisturbios.

En el contexto del Paro Nacional de 2021, varios First Movers provenientes del movimiento estudiantil jugaron un rol importante en activar la protesta, sostenerla y proyectarla hacia un escenario de transformación institucional. Por ejemplo, Alfredo Mondragón exlíder estudiantil de la Universidad del Valle y representante a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, emergió como una voz articulada entre las juventudes organizadas y el Congreso, denunciado de forma sistemática los abusos del ESMAD y proponiendo alternativas desde la vía legislativa (Revista La Palabra, 2021).

Lucas Villa y Dylan Cruz, se convirtieron en iconos de la protesta social tras ser asesinados mientras marchaban, su figura condensa la indignación popular frente a la violencia policial y movilizo varios sectores sociales además del estudiantil (Revista Semana, 2021). Colectivos como los Escudos Azules, tomaron posición frente a la violencia sistemática para organizar y desempeñar un papel que garantizaba la seguridad de quienes se manifestaban. La organización y acciones de primera línea fueron emblemáticas para la resistencia juvenil frente a los abusos de poder. Estos actores junto con actores como la ACREES y UNESS, dieron forma a las expresiones del inconformismo y contribuyeron a consolidar una agenda pública frente al accionar del ESMAD, presionando por su reforma y abriendo paso a la creación de la UNDMO.

Una de las fortalezas más visibles del movimiento estudiantil durante las jornadas de protesta del Paro Nacional de 2021 fue su relativa homogeneidad en términos de demandas, identidad y trayectoria organizativa, lo cual facilito una coordinación eficaz de los repertorios de protesta y una respuesta unificada frente a la violencia estatal. Esta homogeneidad se trata de la existencia de una memoria compartida de lucha que consolido una cultura de resistencia en torno a la defensa de la educación pública, los derechos humanos y la dignidad juvenil. A

pesar de su diversidad, los estudiantes lograron articularse en torno a símbolos comunes como las primeras líneas, las asambleas interuniversitarias y los comités de derechos humano, conformando una red cohesionada que hizo frente a la represión policial.

Esta estructura permitió que las denuncias contra el accionar del ESMAD pasaron a otras esferas y su debate en el escenario público quedó consolidado sobre su uso desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes. La capacidad del movimiento estudiantil para actuar como un solo bloque fue clave para mantener la presión social que derivó junto a otros factores, en la transformación del ESMAD y su intervención en la protesta.

El análisis desarrollado en este capítulo afirma que el movimiento estudiantil colombiano desempeñó un rol central en la configuración del debate público y en la presión social que incidió en la transformación del ESMAD hacia la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Estas incidencias se expresaron de manera directa, simbólica e indirecta a través de la activación de repertorios de protesta sostenibles, la producción de marcos de sentido compartido, la articulación territorial con otros sectores sociales y la participación en escenarios institucionales y mediáticos.

Desde la teoría de la acción colectiva se pudo identificar como el movimiento estudiantil supo interpretar una estructura de oportunidades políticas marcada por la crisis de legitimidad estatal y el malestar social acumulado. Asimismo, resignificó la protesta como un ejercicio de dignidad y defensa de los derechos humanos construyendo una narrativa que logró legitimarse ante la sociedad colombiana.

En síntesis, la participación del movimiento estudiantil durante el estallido social de 2021 constituye un caso emblemático de acción colectiva con capacidades de incidencia política simbólica y comunicacional. Este capítulo, demuestra que los estudiantes no solo resistieron, sino que también propusieron, organizaron y transformaron, convirtiéndose en un protagonista de un momento histórico que aun interpela las bases del orden institucional y el manejo de las protestas en Colombia.

3.3. Conclusiones.

Para concluir, el presente trabajo analizó el rol del movimiento estudiantil colombiano en el marco del Paro Nacional de 2021, centrándose en su capacidad para incidir en la transformación del Escuadro Móvil Antidisturbios (ESMAD) hacia la creación de la Unidad de Dialogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). A partir de un enfoque teórico de la acción colectiva basado en aportes como el de Sidney Tarrow, Alberto Melucci, Charles Tilly y Mancur Olson, se abordaron las dinámicas de la acción colectiva desde diferentes categorías analíticas. Este análisis permitió identificar cómo los estudiantes lograron posicionarse como actores políticos, incidentes, utilizando herramientas y repertorios de protesta para construir una narrativa basada en la dignidad y la estructura organizada del movimiento estudiantil.

A continuación, se presentan las principales conclusiones de esta investigación, las cuales sintetizan los hallazgos más relevantes y dan cuenta del alcance transformador del movimiento estudiantil en el contexto de protesta en Colombia. En primer lugar, el movimiento estudiantil colombiano, ha sido históricamente vinculado con la defensa de la educación pública, pero en el Paro Nacional de 2021 demostró una capacidad de acción colectiva para articular las denuncias y demandas frente al abuso de poder por parte de la Fuerza Pública y las reformas institucionales planteadas desde el gobierno, además de resignificar su rol en la protesta en Colombia como un actor trascendental para los cambios que se venían presentando a raíz del descontento social.

En segundo lugar, la articulación de las oportunidades políticas para la transformación institucional, es decir que el movimiento estudiantil tuvo una lectura sobre el contexto político a través de las denuncias por abuso de la fuerza, y un desgaste de la credibilidad y legitimidad del gobierno de Iván Duque lo que llevó a articular su indignación con otros sectores sociales, transformando el malestar social en acciones de cooperación y una resistencia frente a los abusos sistemáticos por parte de miembros del escuadro antidisturbios. La movilización estudiantil no se limitó a la defensa de derechos sectoriales como la educación, sino que se posicionó como un actor que resignificó el malestar general en vías de hechos a través de la protesta y sus repertorios de movilización.

En tercer lugar, una de las contribuciones del movimiento estudiantil no solo se vio reflejado hacia la transformación del ESMAD, sino al resignificado de la protesta social en Colombia a través de la creación de nuevos marcos simbólicos. Por un lado, la dignidad, como una

bandera clave para las movilizaciones, permito reconfigurar la forma en que la ciudadanía comprendía y experimentaba la protesta. Esta ya no vista únicamente como un acto de rechazo o confrontación hacia el Estado. Sino como una expresión legítima de participación democrática, donde el clamor por justicia social, el respeto a los derechos humanos y la defensa a la vida se convirtieron en ejes centrales. El movimiento estudiantil transformo los espacios públicos en escenarios pedagógicos, culturales y éticos desde donde se disputaron los sentimientos impuestos por el Estado sobre el orden y la criminalidad de la protesta. Además, a través de prácticas simbólicas como murales, grafitis intervenciones artísticas los estudiantes construyen un relato colectivo que reivindicó la juventud como sujeto político y resignificó la protesta como acto de construcción ciudadana.

Por último, si bien la presión ejercida por el movimiento estudiantil y otros sectores sociales durante el Paro Nacional de 2021 fue determinante para abrir el debate sobre la necesidad de reformar el modelo de intervención del Estado a la protesta social, la transformación del ESMAD en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), plantea interrogantes sobre la profundidad y efectividad de estos cambios institucionales en la manera de intervenir en la protesta. Aunque en el plano discursivo se mantiene la idea de la transformación del escuadrón antidisturbios la estructura operativa, su doctrina de control y sus mecanismos de intervención están orientados hacia las lógicas represivas. Desde esta perspectiva, la transformación del ESMAD se convierte en un tema simbólico que en un verdadero cambio sustancial sobre la intervención en la protesta. En este sentido, aunque un cambio de nombre responde a una demanda legítima, no garantiza por sí mismo una transición profunda de la relación entre el Estado y la ciudadanía movilizada.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Zapata, K. (2023). *ESMAD, Movimiento Estudiantil e impunidad estatal en el escenario de la protesta social colombiana*. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/39719>
- Archila, M. (2020). 21N: el desborde de la movilización en Colombia. *LASA FORUM*, 51(4), 7. <https://forum.lasaweb.org/files/vol51-issue4/Dossier-3.pdf>
- Archila Neira, M. (2003). *Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia, 1958-1990*. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia.
- Archila Neira, M. (2003). *Violencia y política en Colombia, de la nación fragmentada a la construcción del estado*. Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/30803>
- Banco Mundial. (2022). *Índice de Gini*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CO>
- Casas Ramírez, D. A. (2019). ESMAD, seguridad y posacuerdo: perspectivas sobre la protesta en Colombia. *Revista UDEM*. <https://doi.org/10.22395/csye.v8n16a5>
- Centro de Investigación y Educación Popular. (2013). *¿Arma de control o de guerra?* https://www.cinep.org.co/publi-files/PDFS/20131101i.esmad_arma80.pdf
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2024). *El pueblo en las calles: memorias de resistencia y represión en el estallido social de 2021*. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/EIPuebloEnLasCalles.pdf>
- Charles Tilly, & Lesley J. Wood. (2009). *Los movimientos sociales, 1768-2008*. Manantial.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021, June 8). Observaciones y recomendaciones. Visita de trabajo a Colombia. Retrieved 2025, from https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2019, diciembre 2). *CIDH expresa su preocupación por actos de represión por parte de agentes del Estado y rechaza toda forma de violencia en el marco de las protestas en Colombia*. CIDH expresa su preocupación por actos de represión por parte de agentes del Estado y rechaza toda forma de violencia en el marco de las protestas en Colombia. <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/313.asp>

Cruz Rodríguez, E. (2012). La MANE y el paro nacional universitario de 2011 en Colombia. *Ciencia Política*, 14, 140-193. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4781408.pdf>

Cruz Rodríguez, E. (2017). La rebelión de las ruanas el paro nacional agrario en Colombia. *Análisis: revista colombiana de humanidades*, 89-109. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6140723>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2024, Julio 16). <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria>

Departamento Nacional de Planeación. (2012, octubre). *Pobreza monetaria y desigualdad del ingreso: Análisis de los resultados recientes 2010-2011*. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/An%C3%A1lisis%20resultados%20pobreza%20y%20desigualdad_191012.pdf

Expansión. (2011). Miles de estudiantes protestan en Colombia contra una reforma educativa. https://expansion.mx/mundo/2011/11/10/miles-de-estudiantes-protestan-en-colombia-contra-una-reforma-educativa?utm_source

Foro Nacional por Colombia. (2020, October 22). *La crisis social en Colombia acentuada por la pandemia*. Foro Nacional por Colombia. Retrieved February 24, 2025, from <https://foro.org.co/la-crisis-social-en-colombia-acentuada-por-la-pandemia/#foro-Foto-tomada-de-Clacso-Sin-fines-economicos-solo-ilustrativos>

- Grupo de Memoria Histórica. (2013). *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Centro Nacional de Memoria Histórica. Retrieved April 5, 2025, from <https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html>
- Guevara Rosas, E. (2021, junio). *Colombia: Represión violenta, paramilitarismo urbano, detenciones ilegales y torturas contra manifestantes pacíficos en Cali*. Manistia Internacional. <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/colombia-represion-violenta-contra-manifestantes-pacificos-cali/>
- Indepaz. (2022). *Cifra de violencia en las regiones*. Indepaz. Retrieved 2025, from <https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-FINAL-2021.pdf>
- Infobae. (2022). *Desaprobación de Iván Duque*. . <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/05/desaprobacion-de-ivan-duque-por-temas-de-corrupcion-es-del-89>
- Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. (2023). *Créditos de ICETEX crecieron un 38% en los últimos cinco años*. <https://web.icetex.gov.co/es/-/creditos-de-icetex-crecieron#:~:text=En%202018%2C%2035.405%20cr%C3%A9ditos%20girados,durante%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20a%C3%B1os.>
- Internacional Crisis Group. (2003). *COLOMBIA: LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DEL PRESIDENTE URIBE*. <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/colombia-president-uribes-democratic-security-policy>
- Juan Pablo Guevara. (2015). *El Plan Colombia o el desarrollo como seguridad*. SciELO Colombia. Retrieved April 19, 2025, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-159X2015000100005
- Kalmanovitz, S. (2001). *Las instituciones colombianas en el siglo XX*. Banco de la Republica. <https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra131.pdf>

Lucero Giraldo Marín, & Bibiana Magaly Mejía. (2011). *Estrategias comunicativas para la movilización social en procesos de planeación del desarrollo local. A.*

<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/887/773>

Manual básico de incidencia política. (2016). Cáritas Colombiana.

<https://caritascolombiana.org/wp-content/uploads/2016/10/Manual-b%C3%A1sico-incidencia-pol%C3%ADtica.pdf>

Marun Burgos, D. (2021). Explicando al movimiento estudiantil colombiano en el 2018: una aproximación contenciosa. <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ae05f946-4380-44c3-8724-8e19d9bd223a/download>

Melucci, A. (1996). *Challenging codes: Collective action in the information age.* Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511520891>

Melucci, A. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia.*

<https://www.cervantesvirtual.com/obra/accion-colectiva-vida-cotidiana-y-democracia-924292/>

Ministerio de Educación. (2018, diciembre 26). *Gobierno y estudiantes logran histórico acuerdo que aumenta en más de 4,5 billones de pesos los recursos para la educación superior pública durante el cuatrienio.* Ministerio de Educación.

<https://www.mineduccion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/379966:Gobierno-y-estudiantes-logran-historico-acuerdo-que-aumenta-en-mas-de-4-5-billones-de-pesos-los-recursos-para-la-educacion-superior-publica-durante-el-cuatrienio>

Ministerio de Educación. (2022, febrero 12). *SPADIES - Estadísticas de deserción.* Ministerio de Educación Nacional.

<https://www.mineduccion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Estadisticas-de-desercion/>

- Ministerio de Educación Nacional. (2016, noviembre). *Boletín en educación superior en cifras*.
<https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Publicaciones-Educacion-Superior/359642:Boletin-Educacion-Superior-en-Cifras-Noviembre-de-2016>
- Negret Mosquera, C. A. (2021, diciembre 6). *Informe Final: Para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020*. Para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/administracion-distrital/informe-para-esclarecimiento-de-hechos-del-9-y-10-de-sep-de-2020?utm_source
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2021). *El paro nacional en 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de la reunión pacífica en Colombia*. https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2022/05/211214-Colombia_Documento-lecciones-aprendidas-y-observaciones-Paro-Nacional-2021
- Olson, M. (1992). *La lógica de la acción colectiva: Bienes públicos y la teoría de grupos*. Ariell.
- Patiño, J. (2019). *Colombia: el ESMAD frente a la legislación y la letalidad de las armas no letales*. RIDH. Retrieved 2025, from <https://www.ridh.org/news/colombia-el-esmad-frente-a-la-legislacion-y-la-letalidad-de-las-armas-no-letales/>
- Policía Nacional de Colombia. (n.d.). <https://www.policia.gov.co/contenido/oficina-escuadron-movil-antidisturbios>
- Registraduría Nacional. (2018, mayo 27). *Resultados de pre conteo primera vuelta*. Resultados de pre conteo primera vuelta.
https://elecciones1.registraduria.gov.co/pre_pres_2018/resultados/html/resultados.html?utm_source=
- Revista La Palabra. (2021, abril 28). *28 de abril de 2021: una fecha para no olvidar*.
<https://lapalabra.univalle.edu.co/28-de-abril-de-2021-una-fecha-para-no-olvidar/>

- Revista Semana. (2021, mayo 6). *¿Quién era Lucas Villa? El joven asesinado en Pereira durante una protesta pacífica*. <https://www.semana.com/nacion/articulo/quien-era-lucas-villa-el-joven-asesinado-en-pereira-durante-una-protesta/202142/>
- Romero, A., & Calderón, L. (2014). *¿EL USO DEBIDO DE LAS ARMAS DE LETALIDAD REDUCIDA, PODRÁ DISMINUIR LA CUANTÍA DE LOS PERJUICIOS PAGADOS, ¿POR LA UTILIZACIÓN DE LAS ARMAS DE FUEGO DE DOTACIÓN OFICIAL?*
<https://repository.umng.edu.co/server/api/core/bitstreams/f5fa64cd-95f4-4d28-ae5-af833226cdbf/content>
- Rubio, C., & Chacón, M. (2023, May 5). Universidades públicas: desfinanciadas y con un billonario faltante. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/vida/educacion/universidades-publicas-desfinanciadas-y-con-un-billonario-faltante-765043>
- Stephania Grajales Zárata, & Daniel Felipe Caicedo. (2022). *Historización del movimiento estudiantil colombiano: las seis generaciones de lucha desde 1900 hasta 2014*.
<https://doi.org/10.15446/cp.v17n33.100346>
- Sussmann, N. (2019, noviembre). *¿Que paso en el bombardeo de Caquetá?*
<https://razonpublica.com/32838-2/>
- Tarrow, S. (1994). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva la política* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Temblores ONG & Indepaz. (2021). *Informe de Temblores ONG e Indepaz a la CIDH*. Informe de Temblores ONG e Indepaz a la CIDH. <https://indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-e-indepaz-a-la-cidh/>
- Universidad Jorge Tadeo Lozano. (2019). *Las 43 muertes que involucran al ESMAD antes del 21N*.
<https://www.utadeo.edu.co/es/articulo/crossmedialab/277626/las-43-muertes-que-involucran-al-esmad-antes-del-21n>